



Bruselas, **XXX**
[...](2021) **XXX** draft

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Directrices relativas a las ayudas estatales a las redes de banda ancha

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ÁMBITO DE APLICACIÓN, TIPOS DE REDES DE BANDA ANCHA Y DEFINICIONES	5
2.1	Ámbito de aplicación.....	5
2.2	Definiciones.....	6
2.3	Tipos de redes de banda ancha	8
2.3.1	Redes fijas de acceso ultrarrápidas.....	8
2.3.2	Redes de acceso móviles	9
2.3.3	Redes de retorno	10
3	EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON ARREGLO AL ARTÍCULO 106, APARTADO 2, DEL TRATADO	10
4	EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON ARREGLO AL ARTÍCULO 107, APARTADO 3, LETRA C), DEL TRATADO	12
5	AYUDA PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE BANDA ANCHA	14
5.1	Primera condición: facilitar el desarrollo de una actividad económica.....	14
5.1.1	Las redes como facilitadores de actividades económicas	14
5.1.2	Efecto incentivador.....	14
5.1.3	Cumplimiento de otras disposiciones del Derecho de la Unión.....	15
5.2	Segunda condición: la ayuda no debe alterar indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.....	15
5.2.1	Efectos positivos de la ayuda	15
5.2.2	Necesidad de la intervención estatal	15
5.2.3	Idoneidad de la medida de ayuda como instrumento político	26
5.2.4	Proporcionalidad de la medida de ayuda.....	31
5.2.5	Efectos negativos para la competencia y el comercio	42
5.2.6	Ponderación de los efectos positivos de la ayuda con los efectos negativos sobre la competencia y el comercio	42
6	EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS A FAVOR DE LA DEMANDA.....	43
6.1	Bonos sociales	44

6.2	Bonos de conectividad.....	46
6.2.1	Primera condición.....	46
6.2.2	Segunda condición	47
7	TRANSPARENCIA, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SUPERVISIÓN	48
7.1	Transparencia	48
7.2	Presentación de informes.....	49
7.3	Supervisión.....	50
8	PLAN DE EVALUACIÓN <i>EX POST</i>	50
9	DISPOSICIONES FINALES	51

1 INTRODUCCIÓN

- 1) La conectividad es el elemento más importante de la transformación digital. Reviste una importancia estratégica para el crecimiento y la innovación en todos los sectores económicos de la Unión y para la cohesión social y territorial.
- 2) La Unión ha fijado objetivos ambiciosos en la «Comunicación Gigabit»¹, la Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa»², la Comunicación «Brújula Digital»³ y en su propuesta de Decisión por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030⁴ (Programa de política de la Década Digital).
- 3) En la Comunicación Gigabit, la Comisión fijó los siguientes objetivos de conectividad para 2025: i) todos los hogares europeos, rurales o urbanos, deberían tener una conexión a internet que ofrezca velocidades de descarga de al menos 100 Mbps, actualizables a 1 Gbps; ii) los motores socioeconómicos, tales como empresas intensivas en digitalización, centros escolares, hospitales y la administración pública, deberían disfrutar de conectividad de alta velocidad (1 Gbps de velocidad de carga y de descarga); y iii) todas las zonas urbanas y las grandes vías de transporte deberían tener cobertura 5G ininterrumpida.
- 4) La Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa» explica que el término «100 Mbps, actualizables a velocidad de Gigabit» expresa la expectativa de la Comisión de que, a medida que avance la década, los hogares necesitarán cada vez más velocidades de 1 Gbps.
- 5) La Comunicación sobre la Brújula Digital prevé que, para 2030, todos los hogares de la Unión deberían estar cubiertos por una red de altísima velocidad⁵, y todas las zonas pobladas deberían tener cobertura 5G. La propuesta del Programa de Política de la Década Digital destaca que «Las necesidades sociales en cuanto a ancho de banda de carga y descarga aumentan constantemente. De aquí a 2030, las redes con velocidades de gigabit deben estar disponibles en condiciones accesibles para todos aquellos que necesiten o deseen dicha capacidad».

¹ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 14 de septiembre de 2016 «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit» [COM(2016) 587 final].

² Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 19 de febrero de 2020 «Configurar el futuro digital de Europa» [COM(2020) 67 final].

³ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 9 de marzo de 2021 «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» [COM(2021)118 final].

⁴ Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el programa de política «Itinerario hacia la Década Digital» para 2030, [COM(2021) 574 final, 2021/0293 (COD)].

⁵ En la fase actual de desarrollo, la fibra al hogar, la fibra hasta el edificio y DOCSIS 3.1 (redes de cable sólidas) pueden ofrecer velocidades de descarga de 1 Gbps.

- 6) Para lograr los objetivos de la Unión para 2025 y 2030 son necesarias las consiguientes inversiones. Estas inversiones proceden principalmente de inversores comerciales y podrían completarse, si es necesario, con fondos públicos, de conformidad con las normas sobre ayudas estatales. La Comunicación «Configurar el futuro digital de Europa» señala un déficit de inversión de 65 000 millones EUR anuales en infraestructura y redes digitales en la Unión.
- 7) La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto el papel de las redes de comunicaciones electrónicas sólidas para la gente, las empresas y las instituciones públicas. El 27 de mayo de 2020, la Comisión presentó su propuesta de un importante plan de recuperación para mitigar el impacto económico y social de la pandemia: NextGenerationEU⁶. Una de las prioridades clave del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia⁷ («MRR») es apoyar la transición digital, con medidas de conectividad destinadas a colmar la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales y a abordar las deficiencias del mercado con respecto al despliegue de redes fiables. El Reglamento MRR exige que los Estados miembros dediquen al menos un 20 % de los fondos asignados a medidas que impulsen la transición digital.
- 8) Por otra parte, las redes de comunicaciones electrónicas pueden contribuir a lograr los objetivos de sostenibilidad. El objetivo de la Unión de alcanzar la neutralidad climática para 2050, establecido en la Comunicación del Pacto Verde Europeo⁸, no podrá lograrse sin una transformación digital fundamental de la sociedad. Uno de los elementos esenciales de la transformación digital de la Unión es el desarrollo de redes de comunicaciones electrónicas seguras y sólidas que hagan una contribución importante a los principales objetivos medioambientales de la Unión. Al mismo tiempo, las propias redes de comunicaciones electrónicas tendrán que ser más sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos.
- 9) El sector de las comunicaciones electrónicas ha experimentado un profundo proceso de liberalización y ahora está sujeto a una regulación sectorial. El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (el «Código») fue establecido por la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo⁹. El Código establece el marco regulador para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre otras cosas, la posibilidad de que las autoridades nacionales de reglamentación («ANR») impongan medidas de acceso a las empresas poseedoras de peso significativo en el

⁶ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación», [COM(2020) 456 final, de 27 de mayo de 2020].

⁷ Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17) y Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (DO L 4331 de 22.12.2020, p. 23).

⁸ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019: El Pacto Verde Europeo [COM(2019) 640 final].

⁹ Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36).

mercado¹⁰. El mercado de acceso local mayorista en una ubicación fija está sujeto a regulación *ex ante* en casi todos los Estados miembros. Esta regulación es importante para fomentar mercados competitivos, impulsar la inversión e incrementar las posibilidades de elección de los consumidores. Seguir desplegando redes de banda ancha todavía precisa de la intervención de las ANR debido a su papel, por ejemplo, a la hora de garantizar la competencia efectiva en el sector de las comunicaciones.

- 10) La política de competencia, y las normas sobre ayudas estatales en particular, tienen un importante papel que desempeñar en el logro de los objetivos de la estrategia digital y en el desarrollo de una estrategia coordinada de inversión para la conectividad. El objetivo del control de las ayudas estatales en el ámbito de la banda ancha es garantizar que las medidas de ayuda estatal redunden en un mayor grado de cobertura y demanda de la banda ancha del que se daría sin la ayuda, apoyando al mismo tiempo servicios de mayor calidad y más asequibles e inversiones que favorezcan la competencia. Las intervenciones estatales deberían limitar en lo posible el riesgo de excluir las inversiones privadas o de alterar los incentivos a la inversión comercial y, en última instancia, de falsear la competencia en contra del interés común.
- 11) En 2020, la Comisión inició una evaluación de las Directrices sobre banda ancha de 2013¹¹ para comprobar si seguían siendo adecuadas. Los resultados¹² pusieron de manifiesto que, en principio, las normas funcionan correctamente. No obstante, la evaluación también puso de manifiesto que son necesarios algunos ajustes específicos. En concreto, las Directrices sobre banda ancha deberían adaptarse para reflejar los recientes cambios legislativos y las prioridades actuales, así como la evolución tecnológica y del mercado¹³.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN, TIPOS DE REDES DE BANDA ANCHA Y DEFINICIONES

2.1 Ámbito de aplicación

- 12) Para evitar que las ayudas estatales falseen o amenacen falsear la competencia en el mercado interior y afecten significativamente al comercio entre Estados miembros, el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («el Tratado») establece el principio de la prohibición de las ayudas estatales¹⁴. Sin embargo, en determinados casos, este tipo de ayudas puede ser compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, apartados 2 y 3, del Tratado.

¹⁰ Véase el artículo 73 de la Directiva (UE) 2018/1972.

¹¹ Comunicación de la Comisión de 26 de enero de 2013 «Directrices de la Unión Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha» (DO C 25 de 26.1.2013) (las «Directrices sobre banda ancha» de 2013).

¹² Véase el documento de trabajo de la Comisión sobre los resultados de la evaluación de 7 de julio de 2021, SWD(2021) 195 final.

¹³ Véase el documento de trabajo de la Comisión: resumen de la evaluación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue de infraestructura de banda ancha (SWD(2021) 194 final)

¹⁴ Véase también la sección 2.1 de las Directrices sobre banda ancha.

- 13) Los Estados miembros deben notificar las ayudas estatales a la Comisión con arreglo al artículo 108, apartado 3, del Tratado, con la excepción de las medidas que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión¹⁵.
- 14) Las presentes Directrices dan orientaciones sobre cómo evaluará la Comisión, con arreglo al artículo 106, apartado 2, al artículo 107, apartado 3, letra c), y al artículo 107, apartado 2, letra a), del Tratado, la compatibilidad de las ayudas estatales para el despliegue y/o la demanda de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha fijas y móviles.
- 15) Las intervenciones públicas que no cumplan alguna de las condiciones establecidas en el artículo 107, apartado 1, del Tratado no constituyen ayuda estatal¹⁶. Por consiguiente, no están sometidas a los principios de la evaluación de compatibilidad establecidos en las presentes Directrices.
- 16) La financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no esté directa o indirectamente bajo el control de los Estados miembros¹⁷, no constituye ayuda estatal.
- 17) No podrá concederse ayuda para el despliegue y/o la utilización de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha a empresas en crisis, como se definen en las Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis¹⁸.
- 18) Al evaluar una ayuda en favor de una empresa que esté sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, la Comisión tendrá en cuenta el importe de la ayuda todavía por recuperar¹⁹.

2.2 Definiciones

- 19) A los efectos de las presentes Directrices, se aplican las siguientes definiciones:

¹⁵ Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

¹⁶ El anexo II presenta una panorámica, aunque no es exhaustiva, de casos en los que puede descartarse la aplicación de las normas sobre ayudas estatales o la existencia de ayuda estatal.

¹⁷ Tal que la financiación aportada por el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) - [Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014] ((DO L 249 de 14.7.2021, p. 38).

¹⁸ Comunicación de la Comisión «Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis» (DO C 249 de 31.7.2014, p. 1).

¹⁹ Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 1995, TWD/Comisión, asuntos acumulados T-244/93 y T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, apartado 56. Véase también la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO C 247 de 23.7.2019, p. 1).

- a) «red de comunicaciones electrónicas de banda ancha»: red capaz de ofrecer acceso a internet de alta velocidad por medio de diversas tecnologías, que incluye componentes activos y pasivos;
- b) «red fija»: red de comunicaciones electrónicas que ofrece servicios de transmisión de datos a alta velocidad a los usuarios finales en una ubicación fija utilizando diversas tecnologías, entre ellas, cable, Digital Subscriber Line («DSL»), fibra óptica y tecnología inalámbrica;
- c) «red móvil»: red de comunicaciones electrónicas inalámbrica que ofrece conectividad a los usuarios finales en cualquier ubicación en la zona cubierta por la red, utilizando diversas generaciones de tecnología móvil (2G, 3G, 4G, 5G, 6G, etc.);
- d) «red de acceso»: el segmento de una red de comunicaciones electrónicas que conecta la red de retorno con el domicilio del usuario final;
- e) «red de retorno»: parte de la red de comunicaciones electrónicas de banda ancha que constituye el nexo intermedio entre la red básica y la red de acceso y que no conecta a los usuarios finales;
- f) «red básica»: la red troncal que interconecta redes de retorno; consiste en el tramo de la red en el que se agrega el tráfico de todos los usuarios finales, que conecta diferentes zonas o regiones;
- g) «red activa»: red de banda ancha con componentes activos (por ejemplo, transpondedores, encaminadores y conmutadores, estaciones de base radioeléctrica, servidores de control y gestión) y componentes pasivos (como conducciones, postes, mástiles, fibra oscura, distribuidores y bocas de inspección);
- h) «red pasiva»: red de banda ancha sin ningún componente activo; habitualmente comprende la parte física de la red (tuberías, mástiles, conducciones, cámaras de inspección, bocas de inspección, distribuidores en la calle, torres y postes, etc.) y cables de banda ancha (fibra oscura, cables de cobre, etc.);
- i) «velocidad»: rendimiento, basado en el número de bits por segundo, de una conexión, como se define en el punto 5 del anexo I;
- j) «red de acceso ultrarrápido»: red de acceso capaz de ofrecer como mínimo 100 Mbps de velocidad de descarga como se define en el punto (19)i);
- k) «usuario final»: persona física o jurídica (ciudadanos, empresas, administraciones públicas) que utilizan o solicitan servicios de comunicaciones electrónicas;
- l) «horizonte temporal pertinente»: horizonte temporal utilizado para verificar las inversiones privadas previstas correspondientes al período del despliegue previsto de la red financiada con fondos estatales, a partir del momento de la publicación de la consulta pública de la intervención estatal prevista hasta la entrada en funcionamiento de la red (una prestación de servicios mayoristas y/o minoristas). El horizonte temporal pertinente no puede ser inferior a dos años;

- m) «ampliación»: el despliegue de una red financiada con fondos estatales cuando ya existen una o varias redes financiadas con fondos privados;
- n) «exclusión de los inversores»: el gasto público hace que descienda, o incluso elimina, el gasto privado, por ejemplo, cuando una inversión privada en una red fija y/o una red móvil se interrumpe, se desmantela, no se realiza como estaba previsto o se desincentiva debido a la subvención estatal de una inversión alternativa;
- o) «cambio considerable»: una mejora importante gracias a las redes financiadas con fondos estatales, que aporta al mercado nuevas inversiones importantes en infraestructuras en las redes de comunicaciones electrónicas y un nivel significativo de nuevas capacidades en cuanto a disponibilidad y capacidad de servicios de banda ancha, velocidad y otras características relevantes de la red, así como competitividad.

2.3 Tipos de redes de banda ancha

- 20) A efectos de la evaluación de las ayudas estatales, las presentes Directrices distinguen entre redes fijas de acceso ultrarrápidas, redes de acceso móviles y redes de retorno, tal como se definen en la sección 2.3.1-2.3.3.

2.3.1 Redes fijas de acceso ultrarrápidas

- 21) A efectos de la evaluación de las ayudas estatales, las presentes Directrices consideran redes fijas de acceso ultrarrápidas aquellas redes que ofrecen como mínimo 100 Mbps de velocidad de descarga en una ubicación fija, como se define en el punto 19)j).

- 22) En la fase actual de desarrollo tecnológico, hay diferentes tipos de redes de acceso fijas ultrarrápidas, entre otras: i) redes basadas en la fibra (FTTx)²⁰; y ii) redes de cable mejoradas que utilizan el estándar «DOCSIS 3.0» como mínimo. Las redes inalámbricas, tales como algunas redes de acceso inalámbricas²¹ y, en un futuro, las redes por satélite²² puede que también sean capaces de prestar servicios de banda ancha ultrarrápida.

2.3.2 Redes de acceso móviles

- 23) En la fase actual de desarrollo de la tecnología y del mercado, coexisten varias generaciones de tecnologías móviles²³.
- 24) La transición a cada nueva generación móvil generalmente es gradual²⁴. En la fase actual, se siguen desplegando redes 4G en algunas partes de Europa y el despliegue de redes 5G no autónomas depende de las redes troncales de 4G Long Term Evolution (evolución a largo plazo) («LTE»). En un futuro, la red 5G será autónoma y no dependerá de LTE. A diferencia de anteriores generaciones de tecnología móvil, se espera que las redes 5G autónomas permitan servicios de datos móviles más eficaces, entre otras cosas, menor latencia y mayores capacidades de transmisión, y hagan posibles escenarios y aplicaciones de utilización avanzada.

²⁰ FTTx engloba varios tipos de redes, entre otras, fibra hasta el edificio (FTTB), fibra al hogar (FTTH), fibra al domicilio (FTTP) o fibra hasta el distribuidor (FTTC). Ahora bien, las redes FTTC solo pueden prestar servicios ultrarrápidos utilizando la vectorización (tecnología que potencia el rendimiento de VDSL).

²¹ En particular, las redes de acceso inalámbrico fijas basadas en tecnología 5G, potencialmente también otras tecnologías inalámbricas que incluyen soluciones fijas de radio, especialmente la nueva generación de wifi (Wi-Fi6).

²² Las soluciones de tecnología por satélite actualmente se utilizan principalmente en zonas remotas o aisladas en situaciones en las que pueden ofrecer un nivel adecuado de servicios de comunicaciones electrónicas de línea fija. Aunque los satélites disponibles actualmente en la Unión todavía no pueden prestar servicios de banda ancha ultrarrápida, se espera que en un futuro haya satélites más avanzados capaces de mejorar considerablemente la calidad de los servicios de banda ancha y ofrecer velocidades ultrarrápidas (por ejemplo, Very High Throughput Satellite). También se espera que los satélites desempeñen un papel importante en la prestación de servicios a las autoridades públicas. Por otra parte, se están preparando varias constelaciones de satélites Low Earth Orbit (LEO), que se espera puedan rebajar la latencia y el coste de los servicios para los usuarios finales.

²³ Las características de propagación de las bandas del espectro determinan su uso. Por ejemplo, de las tres bandas pioneras identificadas para los servicios 5G, se estima que 700 MHz es adecuada para zonas amplias y cobertura en interiores, los 3.6 GHz (3.4-3.8 GHz) se caracteriza por su elevada capacidad y elevada cobertura, 26 GHz (24.25-27.5 GHz) probablemente se despliegue en zonas urbanas y zonas de puntos de acceso inalámbricos periféricos con una demanda muy elevada, por ejemplo, intercambiadores de transporte, locales de espectáculos, zonas industriales o establecimientos minoristas o a lo largo de las principales carreteras y vías férreas en zonas rurales y no se utilizarán para crear cobertura de área extensa. Las nuevas generaciones móviles pueden también utilizar bandas de frecuencia utilizadas por generaciones anteriores.

²⁴ Las tecnologías celulares han tenido un ciclo de vida de 20 años aproximadamente desde su lanzamiento. Varias versiones posteriores de 2G (la denominada 2G mejorada o 2.xG) eran superiores a la 2G. Las mejoras graduales de la 3G (denominadas versiones 3.xG) tenían mejores rendimientos que la 3G. También en el caso de la 4G, el sistema de comunicación celular 4.5G es mejor que la 4G en varios aspectos. La 4.5G es el resultado de la evolución de LTE, cuyo legado es la LTE Advanced. Las redes 5G autónomas pueden ofrecer mejoras considerables en cuanto a velocidad y latencia al soportar mayor densidad de dispositivos conectados en comparación con generaciones anteriores.

- 25) Para garantizar el uso más eficiente y efectivo del uso del espectro radioeléctrico, los Estados miembros pueden imponer condiciones a los derechos individuales de dicho uso, por ejemplo obligaciones de cobertura y calidad del servicio. Estas obligaciones pueden consistir en la cobertura geográfica y/o de población con determinados requisitos mínimos de calidad del servicio²⁵.

2.3.3 *Redes de retorno*

- 26) Las redes de retorno son insumos necesarios para apoyar tanto las redes de acceso fijas como móviles. Las redes de retorno pueden estar basadas en soluciones de cobre, fibra óptica, microondas y satélite²⁶.

3 EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON ARREGLO AL ARTÍCULO 106, APARTADO 2, DEL TRATADO

- 27) En algunos casos, los Estados miembros pueden definir la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha como servicio de interés económico general (en lo sucesivo denominado «SIEG») con arreglo al artículo 106, apartado 2, del Tratado²⁷ y, sobre esta base, proporcionar financiación pública para el despliegue de una red que preste estos servicios.
- 28) En tales casos, las medidas de los Estados miembros se evaluarán con arreglo a las normas aplicables a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público («el paquete SIEG»)²⁸. Las presentes Directrices únicamente ilustran la

²⁵ Por ejemplo, hasta la fecha las obligaciones impuestas a algunas bandas del espectro exigen, dependiendo de los tipos de espectro, una cobertura de determinado porcentaje de población y/o territorio y unos requisitos mínimos de calidad en cuanto a velocidad y latencia. Las obligaciones de cobertura habitualmente se imponen durante un periodo de hasta cinco años a partir de la asignación del espectro correspondiente y, excepcionalmente, de hasta siete años.

²⁶ En las primeras generaciones de celulares, el retorno desde la estación de base radioeléctrica al centro de conmutación móvil se realizaba en gran medida mediante conexiones punto a punto por microondas. El despliegue de LTE y la introducción de 5G han dado lugar a mayores necesidades de retorno y a un aumento del uso de redes de fibra óptica también para conectar estaciones de base.

²⁷ Según la jurisprudencia, a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general se les habrá confiado esta misión mediante un acto de los poderes públicos. Por ejemplo, un SIEG podrá confiarse a un operador mediante una concesión de servicio público; véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2000, EPAC — Empresa para a Agroalimentação e Cereais, SA/Comisión, asuntos acumulados T-204/97 y T-270/97, ECLI:EU:T:2000:148, apartado 126, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, Fred Olsen, SA/Comisión, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, apartados 186, 188-189.

²⁸ El paquete SIEG comprende la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea a la compensación concedida para la prestación de servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4), la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (DO L 7 de 11.1.2012, p. 3), la Comunicación de la Comisión relativa al Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011) (DO C 8 de 11.1.2012, p. 15) y el Reglamento (UE) n.º 360/2102 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas *de minimis* concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (DO L 114 de 26.4.2012, p. 8). En el momento de redactar estas Directrices, la Comisión ha iniciado el procedimiento de evaluación de las normas sobre las ayudas estatales

definición de SIEG, en aplicación de las normas establecidas en el paquete SIEG a las comunicaciones electrónicas de banda ancha, a la vista de sus especificidades sectoriales.

- 29) Los Estados miembros pueden definir el despliegue y/o la explotación de una red de banda ancha como SIEG con las siguientes condiciones:
- a) El proyecto debe abordar una deficiencia del mercado, es decir, únicamente en zonas no conectadas en las que pueda demostrarse que los inversores privados no están en condiciones de prestar una adecuada cobertura de banda ancha a todos los usuarios en el horizonte temporal pertinente, dejando, por tanto, a una parte considerable de la población sin cobertura²⁹. La Comisión considera que en las zonas en que los inversores privados ya han invertido en una red de banda ancha (o estén en proceso de ampliar la red) y ya prestan servicios de banda ancha competitivos con una cobertura adecuada, la creación de una red paralela competitiva de banda ancha financiada con fondos estatales no puede definirse como SIEG en el sentido del artículo 106, apartado 2, del Tratado³⁰. No obstante, cuando pueda demostrarse que los inversores privados no están en condiciones de ofrecer en el horizonte temporal pertinente una cobertura adecuada³¹ a todos los usuarios finales, dejando a una parte considerable de la población sin cobertura, podrá encomendarse a una empresa la operación de un SIEG para garantizar la conectividad a esa parte de la población sin cobertura, de conformidad con las normas aplicables a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público.

para los servicios sanitarios y sociales de interés económico general (SIEG) y del Reglamento (UE) n.º 360/2012 de la Comisión.

²⁹ Al aplicar las disposiciones relativas a las obligaciones de servicio universal expuestas en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36), un Estado miembro puede establecer obligaciones de servicio universal y una compensación potencial por las mismas si ha constatado, teniendo en cuenta los resultados, en su caso, del estudio geográfico realizado de conformidad con dicha Directiva y, en caso necesario, otras pruebas adicionales, que la disponibilidad en una ubicación fija del servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de los servicios de comunicaciones vocales como se definen en dicha Directiva no puede garantizarse en circunstancias normales de explotación comercial o mediante otros instrumentos potenciales de los poderes públicos en su territorio nacional o en diferentes partes del mismo.

³⁰ Véase el apartado 49 de la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea a la compensación concedida por la prestación de servicios de interés económico general. Véanse también el apartado 154 de la sentencia del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013, *Colt Télécommunications France/Comisión*, T-79/10, ECLI:EU:T:2013:463, y la Decisión de la Comisión C(2016)7005 final, de 7 de noviembre de 2016, en el asunto SA.37183 (2015/NN) – Francia – Programa nacional de muy alta velocidad, apartado 263 (DO C 68 de 3.3.2017, p.1).

³¹ Las redes que se tomarán en consideración para evaluar la necesidad de un SIEG deberían ser siempre de la misma categoría (dependiendo del nivel de servicios definido como SIEG).

- b) La red debe ofrecer conectividad universal a todos los domicilios y locales empresariales en la zona objetivo. El apoyo para la conexión de empresas no es suficiente³²;
 - c) la red debe ser tecnológicamente neutra³³ y debe ofrecer únicamente servicios mayoristas³⁴ (quedando excluidos los servicios minoristas)³⁵; y
 - d) el prestador del SIEG debe ofrecer todas las formas posibles de acceso mayorista abierto sobre una base no discriminatoria, impulsando la prestación de servicios competitivos y accesibles a los usuarios finales.
- 30) Cuando el proveedor de la misión de SIEG sea además un operador de banda ancha integrado verticalmente, deberían establecerse las salvaguardias adecuadas para evitar cualquier conflicto de intereses, una discriminación indebida y cualquier otra ventaja indirecta encubierta³⁶.

4 EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD CON ARREGLO AL ARTÍCULO 107, APARTADO 3, LETRA C), DEL TRATADO

- 31) La Comisión solo considerará las ayudas estatales para el despliegue y/o utilización de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha compatibles con el mercado interior con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado, si contribuyen al desarrollo de determinadas regiones económicas (primera condición), y siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (segunda condición).

³² Conforme al apartado 50 de la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea a la compensación concedida por la prestación de servicios de interés económico general. Véanse también la Decisión de la Comisión C(2006) 436 final, de 8 de marzo de 2006, en el asunto N284/05 – Irlanda – Programa regional de banda ancha: Redes del Área Metropolitana («MANs»), fases II y III (DO C 207 de 30.8.2006, p.3) y la Decisión de la Comisión C(2007) 3235 final de 10 de julio de 2007, en el asunto N890/06 – Francia – Ayuda de Sicoval a una red de muy alta velocidad (DO C 2018 de 18.9.2007, p.1).

³³ Una red debería ser tecnológicamente neutra y permitir así que quienes accedan a ella puedan utilizar cualquiera de las tecnologías disponibles para la prestación de servicios a los usuarios finales en consonancia con los parámetros previstos de la intervención pública.

³⁴ Véase la Decisión de la Comisión C(2016) 7005 final, de 7 de noviembre de 2016, en el asunto SA.37183 (2015/NN) – Francia – Programa nacional de muy alta velocidad (DO C 68 de 3.3.2017, p.1), según la cual el operador no estaba autorizado a prestar servicios minoristas (apartado 163 de la Decisión).

³⁵ Esta limitación está justificada por el hecho de que, una vez desplegada una red de banda ancha que ofrece conectividad universal, los operadores, en condiciones de mercado, normalmente son capaces de ofrecer servicios de comunicación a todos los usuarios finales a un precio competitivo.

³⁶ Tales salvaguardias deberían incluir, en particular, la obligación de contabilidad separada y también la creación de una entidad estructural y jurídicamente separada del operador integrado verticalmente. Dicha entidad debería ser la única responsable de la prestación y ejecución de la misión de SIEG asignada.

- 32) En su evaluación de compatibilidad, la Comisión examina los siguientes aspectos:
- a) Con arreglo a la primera condición, la Comisión examina si la ayuda pretende facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, y en particular:
 - i) la actividad económica facilitada por la medida de ayuda;
 - ii) el efecto incentivador de la ayuda, en cuanto a que esta modifica el comportamiento de las empresas afectadas de tal forma que emprendan actividades adicionales que no desarrollarían sin la ayuda o que emprenderían de una forma restringida o diferente o en otro lugar;
 - iii) la existencia de una infracción de cualquier disposición del Derecho de la Unión en relación con la medida en cuestión.
 - b) Por lo que respecta a la segunda condición, la Comisión sopesa los efectos positivos de la ayuda prevista y los efectos negativos que la ayuda podría tener en el mercado interior, en cuanto a falseamientos de la competencia y efectos adversos sobre los intercambios causados por la ayuda y, en particular:
 - i) los efectos positivos de la ayuda;
 - ii) si la medida de ayuda estatal es necesaria y específica para hacer frente a una situación en la que pueda suponer una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo, por ejemplo, poniendo remedio a una deficiencia del mercado o dando respuesta a un problema de equidad o cohesión;
 - iii) si la ayuda es un instrumento político adecuado para cumplir su objetivo;
 - iv) si la ayuda es proporcionada y está circunscrita al mínimo necesario para alcanzar sus objetivos y estimula inversiones o actividades adicionales en la zona en cuestión;
 - v) si la ayuda es transparente: para medir y minimizar el impacto sobre el mercado interior, los Estados miembros, las partes interesadas, el público en general y la Comisión deben poder acceder fácilmente a la información sobre la ayuda concedida;
 - vi) los efectos negativos de la ayuda sobre la competencia y los intercambios entre Estados miembros.
- 33) Como último paso, la Comisión sopesará los efectos negativos constatados de la medida de ayuda sobre el mercado interior y los efectos positivos de la ayuda prevista sobre las actividades económicas que reciben ayuda. En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones expuestas en el apartado 32), la ayuda se declarará incompatible con el mercado interior.
- 34) Los pasos de la evaluación por parte de la Comisión para el despliegue y utilización de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha se exponen con más detalle en las secciones 5, 6, 7 y 8.

5 AYUDA PARA EL DESPLIEGUE DE REDES DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE BANDA ANCHA

- 35) La Comisión considera el mercado de servicios de banda ancha fija y el mercado de servicios de banda ancha móvil mercados distintos³⁷. Las reglas para la evaluación de la ayuda pueden, por tanto, ser distintas, dependiendo del mercado en cuestión.

5.1 Primera condición: facilitar el desarrollo de una actividad económica

5.1.1 Las redes como facilitadores de actividades económicas

- 36) Los Estados miembros deben señalar las actividades económicas que se verán facilitadas como resultado de la ayuda (por ejemplo, el despliegue de redes fijas para la prestación de servicios eficaces de comunicaciones fijas o el despliegue de redes móviles para la prestación de servicios de voz y datos móviles de gran rendimiento) y explicar cómo se apoya el desarrollo de esas actividades.
- 37) La ayuda para el despliegue de redes fijas y la ayuda para el despliegue de redes móviles puede facilitar el desarrollo de una serie de actividades económicas al aumentar la conectividad y el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Esta ayuda puede facilitar el desarrollo de actividades económicas en zonas en las que tales actividades o bien no existían o solo a un nivel que no sería adecuado para satisfacer las necesidades de los consumidores.

5.1.2 Efecto incentivador

- 38) Solo puede considerarse que la ayuda contribuye al desarrollo de una actividad económica si tiene un efecto incentivador.
- 39) La ayuda tiene un efecto incentivador si incentiva al beneficiario a cambiar su comportamiento con respecto al desarrollo de una determinada actividad económica apoyada por la ayuda que no habría llevado a cabo en el mismo plazo, o solo habría llevado a cabo de manera limitada o diferente, o en otra ubicación, si no se concediera la ayuda.
- 40) La ayuda no debe financiar los costes de una actividad que una empresa realizaría en cualquier caso y no debe compensar el riesgo comercial normal de una actividad económica³⁸.
- 41) Demostrar un efecto incentivador de la ayuda para el despliegue de redes fijas o móviles implica la verificación mediante cartografiado y consulta pública, tal como se

³⁷ Cuando los costes de despliegue de una red fija son muy elevados, puede utilizarse una red móvil de gran rendimiento como alternativa a una red fija. No obstante, sigue habiendo diferencias cualitativas importantes entre ambas tecnologías. A diferencia de las redes fijas, las redes móviles permiten a los usuarios finales desplazarse mientras se comunican (por ejemplo, en un coche). Por otra parte, las redes fijas ofrecen mayor grado de estabilidad y seguridad, sobre todo para la transmisión de datos. Hoy por hoy, los usuarios finales suelen usar ambas tecnologías de forma complementaria, más que como sustitutos una de otra.

³⁸ Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de junio de 2013, HGA y otros/Comisión, C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387 apartado 104.

describe en las secciones 5.2.2.4.1 y 5.2.2.4.2, y si las partes interesadas han invertido o tienen intención de invertir, respectivamente, en redes fijas o móviles en las zonas objetivo dentro del horizonte temporal pertinente. Si se realizara una inversión similar en la zona incluso sin la ayuda, puede considerarse que la ayuda carece de efecto incentivador. Por ejemplo, cuando un operador está sujeto a obligaciones legales, como las obligaciones de garantizar una determinada cobertura de la zona objetivo de conformidad con las obligaciones de cobertura y calidad del servicio asociadas a los derechos de uso de determinado espectro radioeléctrico para despliegues móviles, la ayuda estatal no puede utilizarse para cumplir tales obligaciones, ya que es poco probable que tenga un efecto incentivador y, por tanto, es poco probable que sea compatible con el mercado interior. No obstante, pueden concederse ayudas estatales para ofrecer una calidad de servicio superior a los requisitos establecidos en dichas obligaciones.

5.1.3 Cumplimiento de otras disposiciones del Derecho de la Unión

- 42) Si una medida de ayuda estatal, las condiciones de la misma (incluido el modo de financiación cuando este forme parte integrante de la medida de ayuda) o la actividad que financia conllevan una infracción de una disposición o de un principio general del Derecho de la Unión, la ayuda no puede declararse compatible con el mercado interior³⁹. Este puede ser el caso de las medidas de ayuda en las que su concesión esté supeditada a la obligación de que el beneficiario tenga su sede o esté establecido en el Estado miembro de que se trate, o a supeditar la ayuda a cláusulas que la condicionen directa o indirectamente al origen de los productos o equipos, como los requisitos de que el beneficiario adquiera productos producidos en el país.

5.2 Segunda condición: la ayuda no debe alterar indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común

5.2.1 Efectos positivos de la ayuda

- 43) Los Estados miembros deben describir si la ayuda tendrá efectos positivos y, en caso afirmativo, de qué manera.
- 44) Los Estados miembros podrán decidir diseñar medidas de ayuda estatal que contribuyan a la consecución de los objetivos de la política digital de la Unión y, más concretamente, a reducir la «brecha digital». Pueden optar por intervenir para corregir desigualdades sociales o regionales, o para lograr objetivos de equidad, es decir, como una forma de mejorar el acceso a un medio esencial de comunicación y participación en la sociedad, reforzando así la cohesión social y territorial. Además, los Estados miembros pueden decidir diseñar medidas de ayuda estatal que también contribuyan a impulsar el logro de los objetivos del Pacto Verde de la Unión y promuevan inversiones verdes sostenibles en todos los sectores.

5.2.2 Necesidad de la intervención estatal

- 45) La ayuda estatal debe ir dirigida a situaciones en las que pueda aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo.

³⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, apartado 44.

- 46) Debido a las economías de densidad, generalmente el despliegue de las redes de banda ancha es más rentable donde la demanda potencial es mayor y está concentrada, es decir, en zonas densamente pobladas. En razón de los altos costes fijos de inversión, los costes unitarios se incrementan considerablemente al descender la densidad de población y, por ello, cuando se despliegan según consideraciones comerciales, las redes de banda ancha tienden a cubrir rentablemente solo una parte de la población. Las ayudas estatales pueden, en determinadas condiciones, corregir deficiencias del mercado, mejorando así la eficiencia en el funcionamiento de los mercados e incrementando la competitividad.
- 47) Existe una «deficiencia del mercado» cuando, solo con sus propios recursos, sin intervención pública, los mercados no son capaces de ofrecer un resultado eficiente para la sociedad. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando no se llevan a cabo ciertas inversiones aunque el beneficio económico para la sociedad supere sus costes⁴⁰. En tales casos, la concesión de ayudas estatales puede generar efectos positivos y es posible mejorar la eficiencia global ajustando los incentivos económicos de las partes interesadas.
- 48) En el sector fijo y móvil, una forma de deficiencia del mercado está relacionada con efectos externos positivos que no internalizan los operadores de mercado. Por ejemplo, la disponibilidad de redes fijas y móviles allana el camino para la prestación de más servicios y para la innovación. Los beneficios globales probablemente sean superiores a los beneficios económicos que generan para los inversores de la red. En consecuencia, el mercado generaría una inversión privada insuficiente en redes fijas y móviles.
- 49) Además, cuando los mercados ofrecen resultados eficientes, pero considerados insatisfactorios desde el punto de vista de la política de cohesión, las medidas de ayuda estatal pueden ser necesarias para corregir desigualdades sociales o regionales con el fin de conseguir un mercado más equitativo y conveniente. En particular, una intervención estatal selectiva en el ámbito de la banda ancha puede contribuir a reducir la brecha digital⁴¹.
- 50) Una deficiencia del mercado también puede demostrarse si la red existente ofrece a los usuarios finales particulares o empresariales una combinación de precios y calidad del servicio⁴² que no es óptima. Puede ser el caso cuando determinadas categorías de usuarios tal vez no estén adecuadamente servidos o, especialmente, si por falta de

⁴⁰ Sin embargo, el hecho de que una empresa dada no sea capaz de emprender un proyecto sin ayuda no significa que exista una deficiencia del mercado. Por ejemplo, la decisión de una empresa de no invertir en un proyecto poco rentable puede no ser un indicio de la existencia de una deficiencia del mercado, sino más bien de un mercado que funciona correctamente.

⁴¹ Aunque hay varias razones para esta «brecha digital», la existencia de infraestructuras de banda ancha adecuadas es un prerrequisito para permitir la conectividad y cerrar la brecha. El grado de urbanización es un factor importante para el acceso y la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones. La penetración de internet puede seguir siendo inferior en zonas escasamente pobladas de la Unión.

⁴² En caso de que los Estados miembros consideren que este es el motivo para intervenir, la Comisión examinará si el Estado miembro puede demostrar claramente y con hechos comprobables que las necesidades de los usuarios finales no están satisfechas. Esto podría probarse con una encuesta a los consumidores, un estudio independiente, etc.

tarifas de acceso mayorista reguladas, los precios minoristas pueden ser superiores a los aplicados por los mismos servicios ofrecidos en zonas o regiones del Estado miembro más competitivas aunque, por lo demás, comparables. Si, además, solo hay perspectivas limitadas de que se incorporen al mercado, o presten servicios en esa zona, operadores alternativos, la financiación de una red alternativa podría ser adecuada.

- 51) Sin embargo, si las ayudas estatales para el despliegue de redes fijas y móviles se utilizasen en zonas en las que los operadores de mercado se decidirían normalmente a invertir o en las que ya hubieran invertido, esto podría minar considerablemente los incentivos para que invirtieran primero los inversores comerciales. La mera existencia de deficiencias del mercado en un contexto determinado no es suficiente para justificar la intervención del Estado. Las ayudas estatales solo pueden estar destinadas a las deficiencias del mercado que siguen sin resolver otras políticas y medidas⁴³, por ejemplo las obligaciones reguladoras relativas al uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, incluidas las obligaciones en materia de cobertura y calidad del servicio vinculadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico.

5.2.2.1 Existencia de deficiencias del mercado por lo que se refiere a las redes de acceso fijo

- 52) La ayuda estatal aporta una mejora importante que el mercado por sí solo no es capaz de lograr en zonas en las que no hay una red fija, ni se prevé que se despliegue de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente, capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios finales. En la fase actual de desarrollo del mercado y habida cuenta de las necesidades señaladas de los usuarios finales⁴⁴, puede demostrarse una deficiencia del mercado cuando el mercado no ofrece ni es probable que ofrezca a los usuarios finales una conectividad de 1 Gbps de velocidad de descarga. La velocidad de carga está aumentando cada vez más para garantizar el acceso de los usuarios a una serie de servicios. Por lo tanto, la deficiencia del mercado también puede demostrarse cuando no haya (ni sea probable que la ofrezca el mercado en el horizonte temporal pertinente) una conectividad de 200 Mbps de carga⁴⁵. A medida que avanza la década, también puede demostrarse una deficiencia del mercado⁴⁶ cuando el mercado no satisface ni es probable que satisfaga las necesidades señaladas de los usuarios finales de aumentar la velocidad de carga⁴⁷ hasta 1 Gbps (véase el apartado 5.2.3.1.4).

⁴³ Las medidas administrativas y reguladoras suelen ser menos falseadoras y deben considerarse antes que las intervenciones de ayuda estatal.

⁴⁴ Sonia Strube Martins, Christian Wernick; Telecommunication policy journal 45 (2021): Regional differences in residential demand for very high bandwidth broadband internet in 2025.

⁴⁵ Las redes de banda ancha generalmente tienen velocidades de descarga superiores a las de carga. Las velocidades de carga generalmente oscilan entre un 10 % y un 30 % de la velocidad de carga.

⁴⁶ Demostrar la necesidad de una mejora de las prestaciones de carga significa que el Estado miembro aporte pruebas fiables procedentes de fuentes verificables, por ejemplo, encuestas sobre las necesidades de los usuarios finales, estudios sobre el perfil de los usuarios finales y evolución del tráfico, estrategias de especialización inteligente, etc.

⁴⁷ Velocidad de carga mejorada significa que la velocidad de carga es de más del 30 % y de hasta el 100 % de la velocidad de descarga.

- 53) Es necesaria una evaluación cuidadosa para verificar en qué medida el sector privado es capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios finales con sus propios medios.
- 54) Para evaluar una deficiencia del mercado, se distingue entre los tipos de zonas objetivo. Las zonas de intervención se clasifican en blancas, grises o negras dependiendo de si existen redes ultrarrápidas.

5.2.2.1.1 Zonas blancas

- 55) Las zonas blancas son aquellas en las que no existe una red de banda ancha ultrarrápida y es poco probable que se desarrolle en el horizonte temporal pertinente.

5.2.2.1.2 Zonas grises:

- 56) Las zonas grises son aquellas en las que hay una red ultrarrápida, o está planificada de forma creíble en el horizonte temporal pertinente. La mera existencia de una red ultrarrápida⁴⁸ no implica necesariamente que no haya una deficiencia del mercado.
- 57) Podría demostrarse una deficiencia del mercado si la red ultrarrápida existente o planificada de forma creíble no puede proporcionar al menos 1 Gbps de descarga y 200 Mbps de carga⁴⁹.

5.2.2.1.3 Zonas mixtas (blancas y grises)

- 58) En principio, la intervención propuesta debería estar diseñada de tal forma que la totalidad de la zona objetivo sea o bien blanca o bien gris.
- 59) No obstante, por razones de eficiencia, los Estados miembros pueden seleccionar zonas objetivo que sean parcialmente blancas y parcialmente grises. Cuando algunos usuarios privados y empresariales tengan ya un servicio adecuado en la zona objetivo (o vayan a tenerlo en el horizonte temporal pertinente), ha de garantizarse que la intervención pública no provoca una ampliación indebida de la red existente, lo que puede evitarse si la intervención pública se limita solo a medidas para cubrir carencias. Cuando los Estados miembros puedan demostrar que una ampliación limitada de la red existente es proporcionada y no crea falseamientos indebidos de la competencia, la intervención pública podrá tener lugar⁵⁰. La ampliación debe limitarse a un máximo

⁴⁸ La situación competitiva se evalúa en función del número de operadores de red existentes. En la Decisión de la Comisión C(2011) 7285 final de 19 de octubre de 2011, en el asunto N 330/2010 — Francia — Programa nacional de muy alta velocidad - Parte B (DO C 364 de 14.12.2011, p. 2), se aclaró que la existencia de varios proveedores minoristas en una red (incluido el acceso desagregado al bucle local) no convierte la zona en negra, sino que el territorio sigue siendo una zona gris al existir únicamente una red.

⁴⁹ Aunque las velocidades de carga y descarga son actualmente los parámetros más relevantes de la calidad del servicio, algunos usuarios o la prestación de determinados servicios pueden requerir cada vez más características específicas además de la velocidad (como la latencia o la fluctuación de fase) que podrían ser tenidas en cuenta para justificar la existencia de una deficiencia del mercado.

⁵⁰ El Estado miembro debe demostrar que la ampliación garantiza una reducción significativa del importe de la ayuda estatal necesaria para la zona objetivo (entre otras cosas, que los ingresos procedentes de la zona gris se utilizarán para garantizar la cobertura de la zona blanca, reduciendo así significativamente la diferencia de financiación). Por ejemplo, en la medida en que los ingresos procedentes de las conexiones se tengan en cuenta en el cálculo de la diferencia de financiación (por lo tanto, no es pertinente para las redes exclusivamente mayoristas), una intervención pública que ofrezca conexión al local situado al final de la calle podría resultar costosa si, para evitar falseamientos indebidos de la competencia, no se permitiera

del 10 % de todos los locales de la zona objetivo⁵¹. En esas situaciones, la totalidad de la zona objetivo será considerada como zona «blanca» a efectos de evaluar la intervención pública (lo que significa que las condiciones que se aplican a las zonas blancas se aplican también aquí).

5.2.2.1.4 Zonas negras

- 60) Las zonas negras son aquellas en las que existen o están planificadas de forma creíble al menos dos redes ultrarrápidas independientes⁵². En estas zonas, los servicios de banda ancha se suelen prestar en condiciones competitivas (competencia basada en infraestructuras)⁵³. Podría demostrarse una deficiencia del mercado si ninguna de las redes existentes puede proporcionar velocidades de descarga de 1 Gbps y de carga de 200 Mbps y si ninguno de los proveedores existentes se compromete a mejorar su red a esas velocidades en el horizonte temporal pertinente⁵⁴.
- 61) Si al menos dos redes independientes existentes pueden mejorarse para proporcionar una velocidad de descarga de 1 Gbps⁵⁵, puede suponerse que, a medida que se desarrolle la demanda de velocidades más elevadas, la competencia conducirá a una mejora oportuna hasta alcanzar una velocidad de descarga de 1 Gbps y una velocidad de carga de 200 Mbps. El apoyo estatal para la construcción de una red de banda ancha adicional con capacidades comparables llevará, en principio, a un falseamiento inaceptable de la competencia y al desplazamiento de los inversores privados⁵⁶.

conectar ningún otro local atravesado por la nueva red subvencionada (incluso si esos hogares ya están atravesados por otra red), dado que ello reduciría los ingresos que el operador podría esperar obtener, aumentando así la diferencia de financiación.

⁵¹ El importe de la ayuda estatal ha de tener en cuenta los ingresos obtenidos de los domicilios afectados por la ampliación para evitar una compensación excesiva en el cálculo de la diferencia de financiación.

⁵² La misma empresa puede explotar redes distintas en la misma zona (fijas e inalámbricas fijas), pero esto no cambiará el «color» de dicha zona. De igual manera, el color de la zona no cambia aunque existan dos redes explotadas por sociedades diferentes pertenecientes al mismo grupo.

⁵³ Si solo hay una red, aún en el caso de que esta red la utilicen, mediante desagregación (ULL), varios operadores alternativos, la zona se considerará gris. Véase también la Decisión de la Comisión C(2011)7285 final, de 19 de octubre de 2011, en el asunto N 330/2010 — Francia — Programa nacional de muy alta velocidad - Parte B (DO C 364 de 14.12.2011, p. 2).

⁵⁴ Independientemente de las necesidades demostradas de una mayor velocidad de carga, no es posible intervenir si hay al menos dos redes que puedan mejorarse para proporcionar al menos una velocidad de carga de 1 Gbps.

⁵⁵ Se considera que una red puede mejorarse para ofrecer una velocidad de descarga de 1 Gbps, si dicha red puede ofrecer una velocidad de descarga de 1 Gbps sobre la base de una inversión limitada, como una mejora activa de los equipos.

⁵⁶ Véase la Decisión C(2006) 3226 final de la Comisión, de 19 de julio de 2006, en el asunto C 35/05 (ex N 59/05) — Países Bajos, Infraestructura de banda ancha en Appingedam (DO L 86 de 27.3.2007, p. 1). En dicha Decisión, la Comisión señaló que las fuerzas competitivas del mercado específico no se habían tenido debidamente en cuenta. En particular, que el mercado de banda ancha de los Países Bajos era un mercado cambiante en el que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los operadores de cable y los proveedores de servicios de internet, estaban introduciendo servicios de banda ancha de alta capacidad sin ningún apoyo estatal.

5.2.2.2 Existencia de deficiencias del mercado por lo que se refiere a las redes de acceso móvil

- 62) La Comisión considera que existe una deficiencia del mercado en zonas en las que no hay una red móvil, ni se prevé que se despliegue de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente⁵⁷, capaz de satisfacer las necesidades de los usuarios finales.
- 63) Las aplicaciones actuales y futuras dependen cada vez más de redes móviles sólidas que estén disponibles en una base geográfica amplia⁵⁸. Los usuarios finales necesitan movilidad durante la comunicación, pero también acceso a datos mientras se desplazan. Se espera que se desarrollen nuevas formas de actividad económica que requieran un acceso en línea fluido tanto a los servicios móviles de datos como de voz. Según se van desarrollando con el tiempo actividades económicas y nuevos servicios móviles, la red móvil debe ofrecer cada vez mayor rendimiento. La falta o insuficiencia de conectividad móvil puede ser perjudicial para determinadas actividades económicas, como las actividades industriales, agrícolas o turísticas o la movilidad conectada, o puede suponer un riesgo para la seguridad de los ciudadanos⁵⁹. En concreto, este puede ser el caso de las regiones remotas o de zonas de baja densidad de población o despobladas.
- 64) En una zona en la que ya exista al menos una red móvil o se prevé que se despliegue de forma creíble dentro del horizonte temporal pertinente, el apoyo público a la construcción de una nueva red móvil podría falsear la dinámica del mercado.
- 65) El apoyo público al despliegue de una red móvil en una zona de este tipo solo puede considerarse necesario cuando pueda demostrarse de forma acumulativa que la red móvil existente o prevista no ofrece a los usuarios finales una calidad de servicios suficiente para satisfacer la evolución de sus necesidades y que el apoyo público solucionará adecuadamente la deficiencia del mercado detectada, aportando así una mejora sustancial que el mercado no puede ofrecer⁶⁰. Las capacidades limitadas de las

⁵⁷ Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2021)3492 final, de 21 de mayo de 2021, en el asunto SA.58099 (2021/NN) – Alemania – Comunicaciones móviles Mecklemburgo-Pomerania Occidental (DO C 260 de 2.7.2021).

⁵⁸ Véase también la Comunicación Gigabit, que señala aplicaciones necesarias para los sectores de la automoción, los transportes, la industria, la salud, así como la próxima generación de servicios de emergencia y seguridad (por ejemplo, la conducción conectada y automática, las intervenciones quirúrgicas a distancia, la inteligencia artificial y la agricultura de precisión).

⁵⁹ El artículo 26, apartado 5, de la Directiva de Servicio Universal establece la obligación de que los operadores de comunicaciones electrónicas faciliten la información relativa a la ubicación de las personas que efectúen las llamadas en cuanto la autoridad que tramite las llamadas de emergencia reciba la llamada. Desde el 21 de diciembre de 2020, el artículo 109 del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas hace obligatoria la puesta a disposición del punto de respuesta de seguridad pública más apropiado no solo de la información sobre la ubicación basada en redes, sino también de la ubicación basada en el dispositivo móvil, que es más precisa.

⁶⁰ Véanse, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2020) 8939 final, de 16 de diciembre de 2020, en el asunto SA.54684 (2021/NN) – Alemania – Comunicaciones móviles: Despliegue de infraestructuras móviles de alta capacidad en Brandemburgo (DO C 60 de 19.2.2021, p. 2) y la Decisión de la Comisión C(2021)1532 final, de 10 de marzo de 2021, en el asunto SA.56426 (2021/NN) – Alemania – Despliegue de infraestructuras móviles de alta capacidad en Baja Sajonia (DO C 144 de 23.4.2021, p. 2); Decisión de la Comisión C(2021) 3565 final, de 25 de mayo de 2021 en el asunto SA.59574 – Alemania - Despliegue de infraestructuras móviles de alta capacidad en Alemania (pendiente de publicación).

redes móviles existentes o previstas pueden deberse, por ejemplo, a la insuficiente densidad de antenas, al ancho de banda específico del espectro o a las características de los equipos activos⁶¹.

- 66) Así pues, habiendo una red 4G, o incluso 5G, puede existir una deficiencia del mercado cuando dicha red no ofrezca a los usuarios finales, ni es probable que les vaya a ofrecer, suficiente calidad de servicios para satisfacer la evolución de sus necesidades.
- 67) Las nuevas formas de actividad económica y de servicios requerirán un acceso continuo en línea (por ejemplo, para la movilidad conectada y automatizada a lo largo de los corredores de transporte) y, además de determinadas velocidades y capacidades mínimas, también otras características específicas, como menor latencia, la virtualización de la red o la capacidad de conectar múltiples terminales en el contexto industrial o agrícola. En tales situaciones, a pesar de la presencia de una red móvil, puede ser necesario el apoyo público para abordar deficiencias específicas del mercado relacionadas con casos de uso detectados.
- 68) En principio, aún cuando exista una deficiencia del mercado, no puede concederse ayuda estatal para desplegar una red móvil si el despliegue de dicha red forma parte del cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la asignación del espectro. No obstante, puede concederse ayuda estatal para proporcionar la calidad del servicio adicional necesaria para satisfacer las necesidades probadas de los usuarios finales más allá de lo que ya se exige para cumplir dichas obligaciones. Esta ayuda solo puede cubrir los costes adicionales necesarios para garantizar una mayor calidad de la red.
- 69) Cuando, en una zona determinada, haya o vaya a haber dentro del horizonte temporal pertinente al menos una red móvil que preste servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de los usuarios finales (véanse los apartados 63), 65) y 67)), el apoyo público a una red móvil adicional con capacidades equivalentes daría lugar, en principio, a un falseamiento inaceptable de la competencia y a la exclusión de las inversiones privadas. De no haber una deficiencia del mercado claramente demostrada, la Comisión considerará negativamente esas medidas.

5.2.2.3 Existencia de deficiencias del mercado por lo que se refiere a las redes de retorno

- 70) La red de retorno es un requisito previo necesario para el despliegue de redes de acceso. Las redes de retorno tienen el potencial de estimular la competencia en las zonas de acceso en beneficio de todas las redes y tecnologías de acceso. Un retorno fiable puede estimular las inversiones privadas para conectar a los usuarios finales, siempre que la red de retorno garantice el acceso en condiciones abiertas, transparentes

⁶¹ En la actualidad, las obligaciones de cobertura suelen requerir una velocidad de descarga de entre 30 Mbps y 100 Mbps. Es poco probable que las zonas en las que se ofrecen estas velocidades más altas tengan una deficiencia del mercado en la coyuntura actual y con la evolución actual del mercado. Pero se trata de un mercado en el que las necesidades de los usuarios finales evolucionan rápidamente. Las redes móviles de última generación en Europa son capaces en la actualidad de proporcionar velocidades de descarga de 150 Mbps y de carga de 50 Mbps - Directrices del ORECE sobre las redes de muy alta capacidad — BoR (20) 165.

y no discriminatorias a todos los operadores y tecnologías. La financiación pública de las redes de retorno es generalmente una medida que fomenta la competencia y las inversiones, ya que permite a los operadores terceros desplegar redes de acceso y ofrecer servicios de conectividad a los usuarios finales.

- 71) Puesto que las redes de retorno transportan el tráfico de diversas redes de acceso fijas y/o móviles, las redes de retorno requieren una capacidad de transmisión significativamente superior a la de las redes de acceso individuales. Teniendo en cuenta las necesidades actuales de los usuarios finales, la rápida mejora en curso de las redes de acceso con una demanda cada vez mayor de transmisión de datos y el mayor rendimiento de cada nueva generación móvil, las redes de retorno tienen que hacer frente a un aumento significativo de la capacidad requerida. En la fase actual de desarrollo tecnológico, este aumento de la demanda de capacidad puede abordarse mediante redes de retorno basadas en fibra o en otras tecnologías capaces de ofrecer el mismo nivel de rendimiento y fiabilidad de las redes de retorno basadas en fibra.
- 72) Puede haber una deficiencia del mercado en lo que respecta a la red de retorno cuando no haya retorno, o cuando la red de retorno existente o prevista no se base en fibra u otras tecnologías capaces de ofrecer el mismo nivel de rendimiento y fiabilidad de la fibra⁶².

5.2.2.4 Instrumentos para determinar la existencia de deficiencias del mercado

- 73) Para identificar las zonas con deficiencias del mercado, los Estados miembros deben determinar, sobre la base de un mapa detallado (véase el apartado 5.2.2.4.1) y de una consulta pública (véase el apartado 5.2.2.4.2), si existen redes fijas o móviles o si está previsto que se implanten de forma creíble en la zona en el horizonte temporal pertinente.

5.2.2.4.1 Cartografía y análisis de la cobertura

- 74) Los Estados miembros deben identificar qué zonas geográficas estarán cubiertas por la medida de ayuda en cuestión y para ello elaborarán un mapa detallado. La Comisión considera que la metodología descrita en el apartado 3 (para las redes de acceso fijo) y en el apartado 4 (para las redes de acceso inalámbricas móviles y fijas) del anexo I es el método de cartografía más exacto. Los Estados miembros pueden proponer el uso de métodos alternativos a los descritos en esas dos secciones, siempre que cumplan lo establecido en los apartados 4, 5, 9, 10 y 12 de la sección 2, estén debidamente justificados e incluyan un dictamen motivado de la autoridad nacional reguladora que respalde la metodología alternativa propuesta.

⁶² Para evitar que la red de retorno se convierta en un cuello de botella, puede ser necesario aumentar su capacidad paralelamente al despliegue de redes de acceso más eficaces. Por ejemplo, Croacia propuso una intervención estatal en su mercado nacional de retorno, que se caracterizaba por limitaciones de capacidad. Esto dio lugar a precios elevados en el mercado descendente. El actual operador de retorno no estaba dispuesto a invertir en un aumento de la capacidad. Dado que el organismo regulador nacional no podía resolver esta cuestión, la Comisión aprobó un régimen de ayudas estatales a la inversión en infraestructuras de retorno de fibra al considerar que la posición dominante se había convertido en un cuello de botella que constituía una deficiencia del mercado. Decisión de la Comisión C(2016) 436 final, de 25 de enero de 2016, en el asunto SA.38626 (2015/NN) – Croacia – Plan Nacional de Banda Ancha (DO C 104 de 18.3.2016, p.1).

- 75) Los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para definir las zonas objetivo. No obstante, se les anima a tener en cuenta las condiciones económicas, geográficas y sociales en la definición de las zonas pertinentes. Por ejemplo, el tamaño de las zonas objetivo puede jugar un papel en el resultado del procedimiento de selección competitivo, puesto que unas zonas demasiado pequeñas pueden no dar suficientes incentivos económicos para que los agentes del mercado opten a la ayuda, mientras que unas zonas demasiado grandes podrían reducir la competencia resultante del procedimiento de selección. Definir varias zonas más pequeñas, lo que llevaría a la organización de varios procedimientos de selección, permitiría a diferentes empresas potenciales beneficiarse de ayudas estatales, evitando así que la posición de mercado de un operador (posiblemente ya dominante) se viera reforzada aún más por la medida.
- 76) Se recomienda encarecidamente consultar a la ANR, tal como se expone en el apartado 5.2.3.5.

5.2.2.4.2 Consulta pública

- 77) Los Estados miembros deben publicar, incluso en una página web adecuada a disposición del público a nivel nacional⁶³, las principales características de la medida y la lista de zonas objetivo reflejadas en el mapa detallado⁶⁴.
- 78) La consulta pública debe invitar a las partes interesadas a formular observaciones sobre la medida y a presentar información fundamentada sobre sus redes presentes o previstas de forma creíble en la zona objetivo dentro del horizonte temporal pertinente⁶⁵.
- 79) Al considerar el calendario previsto para el despliegue de la red subvencionada, los Estados miembros deben tener en cuenta todos los aspectos que cabe esperar razonablemente que afecten a la duración del despliegue de la nueva red (es decir, el tiempo que requiere el procedimiento de selección, las posibles acciones e impugnaciones jurídicas, el tiempo necesario para obtener derechos de paso y permisos, otras obligaciones derivadas de la legislación y la reglamentación nacionales, etc.).
- 80) Los planes de inversión creíbles solo deben tenerse en cuenta en la consulta pública si, por sí solos, ofrecieran resultados similares a los de la red prevista financiada por el Estado.

⁶³ El envío de cartas a proveedores conocidos no cumple los requisitos de una consulta pública que garantice la apertura y la transparencia con respecto a cualquier parte interesada, en aras de la seguridad jurídica.

⁶⁴ Debería incluir, entre otras cosas: la lista de zonas objetivo y su color en función del mapa, la duración de la medida, el presupuesto, las fuentes de financiación pública, la determinación del horizonte temporal pertinente, los criterios de subvencionabilidad, incluida la calidad de los servicios que se han de prestar (velocidades de carga y descarga de los servicios que se prestarán), los umbrales de intervención (es decir, velocidades de carga y descarga de servicios que podrían ser sobredimensionados por la medida), los requisitos de acceso mayorista y la fijación de precios o la metodología de fijación de precios.

⁶⁵ Los resultados de una consulta pública solo son válidos para el horizonte temporal pertinente, tras lo cual, si se proponen cambios o adiciones a las zonas objetivo, volverán a realizarse los mapas y las consultas públicas.

- 81) La consulta pública debe garantizar, en la medida de lo posible, el mismo nivel de granularidad que el mapa detallado y debe llevarse a cabo según lo establecido en el anexo I⁶⁶, teniendo en cuenta las aclaraciones del apartado 74).
- 82) Con independencia de si el mapa detallado pueda haber recopilado ya información sobre futuros planes de inversión, su resultado debe verificarse siempre en la consulta pública. Esto es necesario para minimizar posibles falseamientos indebidos de la competencia con los proveedores existentes y con aquellos que ya tengan planes de inversión creíbles para el horizonte temporal pertinente.
- 83) La consulta pública debe durar al menos 30 días. A partir del final de la consulta pública, el Estado miembro dispone de un año para iniciar el procedimiento de selección o iniciar la ejecución del proyecto para modelos de inversión directa. Si el Estado miembro no inicia el procedimiento de selección o la ejecución del proyecto en el plazo de un año, debe volver a realizar una consulta pública.

5.2.2.4.3 Buenas prácticas⁶⁷: evaluación de planes de inversión privada en la consulta pública

- 84) Existe el riesgo de que una simple «manifestación de interés» en futuros planes de inversión privada en la zona objetivo por parte de una parte interesada en una consulta pública pueda retrasar el despliegue de redes de banda ancha si dicha inversión no se produce posteriormente, mientras que la intervención pública se ha estancado.
- 85) Para reducir el riesgo de que se impidan las intervenciones públicas sobre la base de futuros planes de inversión que no se materialicen, los Estados miembros podrán pedir a las partes interesadas que faciliten, en un plazo adecuado y proporcionado al nivel de información solicitado⁶⁸, pruebas que demuestren la credibilidad de sus planes de inversión. Esto puede incluir, por ejemplo, un plan de despliegue detallado con etapas (por ejemplo, para cada período de seis meses), que demuestre que la inversión se llevará a cabo en el horizonte temporal pertinente y garantizará unos resultados similares a los de la red prevista financiada por el Estado.
- 86) Para evaluar la credibilidad del rendimiento y la cobertura declarados, los Estados miembros podrán utilizar los mismos criterios utilizados para evaluar el rendimiento de las redes existentes, cuando sea razonable y apropiado, como se establece en el anexo I.

⁶⁶ Una consulta pública también puede incluir preguntas a las partes interesadas sobre qué productos de acceso mayorista les gustaría que se ofrecieran en cualquier red de nueva creación financiada por el Estado resultante de una intervención pública en el futuro, con el fin de contribuir al diseño de la medida. Esto no debería impedir que los solicitantes de acceso soliciten nuevas formas de productos de acceso con arreglo a un enfoque de «acceso sobre la base de una demanda razonable».

⁶⁷ Las secciones «Buenas prácticas» dan orientaciones adicionales no vinculantes y ejemplos sobre posibles maneras de ejecutar medidas de ayuda.

⁶⁸ Los Estados miembros podrán incluir este requisito directamente en la consulta pública, para ganar tiempo. O si no, tras la consulta pública, como parte de su evaluación de los resultados de la consulta pública, los Estados miembros podrán solicitar información adicional a determinados prestadores que hayan facilitado información en la consulta pública que pueda equivaler a una mera «manifestación de interés».

- 87) Al evaluar la credibilidad de los futuros planes de inversión, los Estados miembros podrán tener en cuenta los siguientes criterios:
- a) el inversor ha presentado un plan de negocios sólido teniendo en cuenta criterios adecuados relativos, por ejemplo, al calendario, el presupuesto, la ubicación de los hogares destinatarios, la calidad del servicio que se prestará, el tipo de red y la tecnología que se desplegarán y los índices de utilización;
 - b) el inversor ha presentado un plan de proyecto creíble y de alto nivel que tiene debidamente en cuenta las principales etapas del proyecto, como los procedimientos administrativos y los permisos, incluidos los derechos de paso, los permisos medioambientales, las disposiciones en materia de seguridad y protección (por ejemplo, para la 5G), las obras de ingeniería civil, la finalización de la red, el inicio de las operaciones mayoristas y la comercialización de los servicios a los usuarios finales;
 - c) la adecuación del tamaño de la empresa al tamaño de la inversión;
 - d) la trayectoria de los inversores en proyectos comparables;
 - e) si fuera necesario y apropiado, las coordenadas geográficas de los elementos clave de la red prevista (estaciones de base, puntos de presencia, etc.).
- 88) Si un Estado miembro considera que los planes de inversión privada son creíbles, podrá decidir invitar a los operadores a firmar acuerdos de compromiso que incluyan la obligación de informar de los avances en sus etapas declaradas.
- 89) Corresponde a las partes interesadas facilitar información significativa sujeta a la aplicación de las normas nacionales o de la Unión⁶⁹ pertinentes.
- 90) Si no se facilita información pertinente en respuesta a la consulta pública, el Estado miembro podrá tomar una decisión sobre la base de cualquier información que se haya facilitado en la consulta pública. La información facilitada en respuesta a la consulta pública debe ser evaluada por el Estado miembro según lo establecido en la presente sección y en el anexo I. Los Estados miembros deberían comunicar los resultados de su evaluación y sus motivos a todas las partes interesadas que hayan presentado información sobre sus planes de inversión privada.
- 91) El Estado miembro debería consultar a la ANR sobre los resultados de la consulta pública, incluida la evaluación por el Estado miembro de la credibilidad de los futuros planes de inversión⁷⁰.

⁶⁹ Artículo 29 de la Directiva (UE) 2018/1972.

⁷⁰ En el artículo 22 de la Directiva (UE) 2018/1972 se establece un mecanismo similar.

5.2.2.4.4 Buenas prácticas: supervisión *ex post* de la ejecución de los planes de inversión privada

- 92) Si el Estado miembro considera que los planes de inversión privada presentados son creíbles y que, por consiguiente, la zona correspondiente se ha desligado de la intervención pública, podrá decidir exigir a los operadores que hayan presentado los planes o hayan celebrado acuerdos de compromiso que informen periódicamente sobre sus etapas declaradas para desplegar la red y prestar los servicios en el plazo declarado.
- 93) Si el Estado miembro detecta desviaciones del plan presentado que sugieren que el proyecto no se materializará, o tiene motivos suficientes para dudar de que la inversión se lleve cabo según lo declarado, podrá exigir a la parte interesada que facilite más información que demuestre que la inversión sigue siendo creíble.
- 94) Si el Estado miembro tiene dudas fundadas sobre si la inversión se llevará a cabo según lo declarado, podrá decidir en cualquier momento durante el horizonte temporal pertinente incluir las zonas afectadas por la inversión en un nuevo ejercicio de consulta pública, con el fin de verificar su posible admisibilidad para una intervención pública.

5.2.3 *Idoneidad de la medida de ayuda como instrumento político*

- 95) El Estado miembro debe demostrar que la ayuda y su diseño son adecuados para abordar la deficiencia del mercado detectada y alcanzar los objetivos perseguidos por la ayuda. Una medida de ayuda no se considerará compatible con el mercado interior si no es adecuada, por ejemplo si se logra el mismo resultado mediante otras medidas menos falseadoras.
- 96) Para ser adecuadas, las redes fijas y móviles financiadas por el Estado deben ofrecer características significativamente mejoradas en comparación con las redes existentes. Así pues, las redes fijas y móviles financiadas por el Estado deberían poder garantizar un cambio considerable. Este cambio considerable puede demostrarse si, como resultado de la intervención pública: i) el despliegue de la nueva red fija o móvil representa una nueva inversión importante en red de banda ancha⁷¹, y ii) la red financiada por el Estado aporta al mercado un nivel significativo de nuevas capacidades en términos de disponibilidad, capacidad, velocidad y competitividad de los servicios de banda ancha. El cambio considerable debe compararse con el rendimiento de la red o redes existentes. Los despliegues de red planificados de forma creíble no se tienen en cuenta para evaluar el cambio considerable, a menos que, por sí

⁷¹ Por ejemplo, en el caso de las redes fijas, las inversiones marginales referidas simplemente a la actualización de los componentes activos de la red no deberían poder optar a ayudas estatales. Del mismo modo, aunque determinadas tecnologías potenciadoras de la transmisión mediante cable (como la vectorización) podrían incrementar las capacidades de las redes existentes, podrían no requerir importantes inversiones en nuevas redes y por ello deberían quedar excluidas de las ayudas estatales. En el caso de las redes móviles, las inversiones en equipo activo pueden desempeñar un papel importante en la calidad de los servicios prestados. En tales casos, el apoyo público podrá hacerse extensivo también al equipo activo, siempre que no consista simplemente en mejoras graduales, sino que forme parte integrante de una mejora significativa de las capacidades de la red. Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión (C(2021) 9538) — España — SA.57216 — Cobertura móvil en zonas rurales de Galicia (pendiente de publicación).

solos, ofrezcan un rendimiento similar al de la red planificada financiada por el Estado en el horizonte temporal pertinente.

- 97) La intervención pública puede estar sujeta, cuando esté justificado, a un período de protección de la inversión privada de hasta siete años, en principio⁷².

5.2.3.1 Cambio considerable — Redes de acceso fijas

- 98) En el caso de las redes de acceso fijas, las características mejoradas podrán medirse en términos de velocidades. En tal caso, un cambio considerable requiere un aumento sustancial de la velocidad de descarga y carga (véase el apartado 5.2.3.1.4) en comparación con la red existente.

5.2.3.1.1 Zonas blancas

- 99) Cuando las redes existentes no puedan proporcionar velocidad de descarga ultrarrápida, el apoyo público debe:
- a) Velocidad de descarga inferior a 30 Mbps: duplicar como mínimo la velocidad de descarga y alcanzar al menos 30 Mbps de velocidad de descarga;
 - b) Velocidad de descarga igual o superior a 30 Mbps: triplicar como mínimo la velocidad de descarga y alcanzar al menos la velocidad de descarga ultrarrápida. La Unión ha establecido el objetivo estratégico de que, para 2025, «todos los hogares europeos, rurales o urbanos, tendrán acceso a una conexión a internet que ofrezca velocidades de bajada de al menos 100 Mbps, actualizables a alta velocidad»⁷³.
- 100) En todos los casos, la nueva red debe aumentar suficientemente la velocidad de carga⁷⁴ de la red existente que proporcione la velocidad de descarga más elevada.
- 101) Como se explica en el apartado 96), la intervención apoyada por el Estado debe también representar una nueva inversión significativa en infraestructuras que aporte un nivel significativo de nuevas capacidades al mercado⁷⁵.

⁷² La pertinencia y la duración de cualquier período de protección de la inversión privada dependerían de las especificidades de las redes protegidas, por ejemplo, las tecnologías de red subyacentes, los períodos de despliegue, la existencia de períodos reservados, etc.

⁷³ «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit», [COM(2016) 587 final].

⁷⁴ Las redes de banda ancha generalmente tienen una velocidad de descarga superior a la de carga. Las velocidades de carga generalmente oscilan entre un 10 % y un 30 % de la velocidad de descarga. «Aumento suficiente de la velocidad de carga» significa que la velocidad de carga resultante debe estar al menos dentro de estos márgenes.

⁷⁵ Es el caso, por ejemplo, cuando la nueva red extiende sustancialmente la fibra desde el núcleo de la red hasta el extremo de la red, es decir, i) el despliegue de fibra a las estaciones de base para apoyar el despliegue de redes de acceso inalámbrico fijo; ii) el despliegue de fibra a los distribuidores si los distribuidores no estaban conectados anteriormente a una red de fibra; iii) el aumento (profundización) de la fibra en las redes de cable.

5.2.3.1.2 Zonas grises

- 102) Cuando ya exista una red ultrarrápida, el apoyo público a una red de mayor rendimiento solo podrá concederse si la inversión financiada por el Estado en la nueva red triplica al menos la velocidad de descarga y aumenta suficientemente la velocidad de carga en comparación con la infraestructura existente. Como se indica en el apartado anterior, la intervención apoyada por fondos públicos debe también representar una nueva inversión significativa en infraestructuras que aporte un nivel significativo de nuevas capacidades al mercado⁷⁶.

5.2.3.1.3 Zonas negras

- 103) Cuando ya existan al menos dos redes ultrarrápidas, el apoyo público a una red de mayor rendimiento podrá concederse si, además del requisito de triplicar al menos la velocidad de descarga y aumentar suficientemente la velocidad de carga en comparación con la infraestructura existente, la nueva red ofrece una velocidad de descarga de al menos 1 Gbps.

5.2.3.1.4 Velocidades de carga mejoradas

- 104) A medida que avanza la década y a la vista de la evolución que se espera del mercado, puede haber una necesidad demostrada de aumentar la velocidad de carga hasta 1 Gbps. En tales circunstancias, las redes que proporcionan velocidades de descarga de 1 Gbps, pero no velocidades de carga de 1 Gbps, puede que no satisfagan suficientemente las necesidades específicas de los usuarios finales.
- 105) Sobre esta base, puede autorizarse la intervención pública para desplegar redes que ofrezcan una velocidad de carga de hasta 1 Gbps en zonas en las que ya exista⁷⁷ una red que ofrezca una velocidad de descarga de 1 Gbps si el Estado miembro demuestra que se ha detectado la necesidad de aumentar la velocidad de carga hasta 1 Gbps y siempre que se cumplan las condiciones descritas en el apartado 5.2.2.3. Para ello, los Estados miembros deben proporcionar pruebas objetivas fiables procedentes de fuentes verificables.
- 106) La ayuda estatal al despliegue de redes que ofrezcan velocidad mejorada debe dar lugar a un avance tecnológico importante, sostenible, favorecedor de la competencia y permanente sin desincentivar de forma desproporcionada las inversiones privadas.

⁷⁶ Véase también la nota a pie de página 82.

⁷⁷ Independientemente de las necesidades demostradas de una mayor velocidad de carga, no es posible intervenir si hay al menos dos redes que puedan mejorarse para proporcionar al menos 1 Gbps de carga.

5.2.3.2 Cambio considerable — Redes de acceso móviles

- 107) Una red móvil financiada por el Estado debe garantizar un cambio considerable en términos de disponibilidad, capacidad, velocidad y competencia del servicio móvil que pueda fomentar la adopción de nuevos servicios innovadores⁷⁸.
- 108) Como se indica en el apartado 2.2.2, la transición a cada nueva generación móvil generalmente es gradual. Entre dos generaciones consecutivas completas existen sistemas híbridos graduales, que suelen ser más sólidos que sus predecesores. Por ejemplo, el sistema de comunicación celular 4G LTE es mejor que la 4G en varios aspectos y la 5G autónoma es más sólida que la 5G no autónoma. En la misma línea, cada nueva generación de servicios móviles ha proporcionado nuevas capacidades⁷⁹. Si bien todas las generaciones de tecnologías de comunicaciones móviles permiten servicios de voz móviles, solo las generaciones más recientes permiten la prestación de servicios de datos móviles eficaces. El factor diferencial más importante de las generaciones de tecnologías de comunicaciones móviles es el aumento de la capacidad global, ya que las nuevas generaciones ofrecen menor latencia y mayores capacidades de transmisión.
- 109) Dado que la provisión de nuevas capacidades requiere más capacidad, las tecnologías de nueva generación requieren nuevas frecuencias. Puesto que las frecuencias son un recurso escaso, la asignación de dichas frecuencias en la Unión se lleva a cabo sobre la base de una subasta u otros procedimientos de selección competitivos. Cuando se aplica una tecnología móvil de nueva generación como resultado de este proceso, puede suponerse que esta tecnología proporcionará nuevas capacidades significativas en comparación con las redes móviles existentes. Los operadores móviles solo están dispuestos a hacer frente a costes iniciales considerables para obtener nuevos derechos de uso del espectro en apoyo de una nueva tecnología de generación móvil si esperan que esta nueva tecnología ofrezca capacidades superiores que les permitan obtener un rendimiento de dicha inversión a lo largo del tiempo. Sobre esta base, la Comisión ha aceptado que las características adicionales de las redes 4G con respecto a generaciones anteriores equivalen a un cambio considerable⁸⁰. En la misma línea, las redes 5G autónomas tienen capacidades funcionales adicionales en comparación con las generaciones anteriores y en comparación con las soluciones 5G no autónomas, como la latencia ultra baja, la alta fiabilidad y la posibilidad de reservar parte de la red para un uso particular y garantizar una determinada calidad del servicio. Estas características permitirán que las redes autónomas 5G apoyen nuevos servicios (por ejemplo: seguimiento médico y servicios de emergencia, control en tiempo real de maquinaria industrial, redes inteligentes para la gestión de las energías renovables, movilidad conectada y automatizada, detección precisa de fallos e intervención rápida), garantizando así un cambio considerable en comparación con las generaciones anteriores y las redes 5G no autónomas. Se espera que las tecnologías móviles de

⁷⁸ Puede incluir la prestación de nuevos servicios que no habrían sido posibles sin la intervención pública, por ejemplo, la movilidad conectada y automatizada.

⁷⁹ Véase también la nota a pie de página 24.

⁸⁰ Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2020) 8939 final, de 16 de diciembre de 2020, en el asunto SA.54684 (2021/NN) – Alemania – Mobile communications High-capacity mobile infrastructure roll-out in Brandenburg (DO C 60 de 19.2.2021, p. 2).

próxima generación (por ejemplo, 6G) proporcionen nuevas capacidades mejoradas en el futuro.

5.2.3.3 Cambio considerable — Redes de retorno

- 110) Una red de retorno financiada por el Estado debe garantizar un «cambio considerable» en cuanto a los servicios a los que puede prestar apoyo. Puede demostrarse un «cambio considerable» si la nueva red de retorno duplica al menos la velocidad de descarga y la velocidad de carga de las redes de retorno existentes y previstas.

5.2.3.4 Instrumentos políticos alternativos

- 111) Las ayudas estatales no son el único instrumento político a disposición de los Estados miembros para impulsar la inversión en el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha. Los Estados miembros pueden utilizar otros instrumentos disponibles más adecuados, como medidas no monetarias que incidan en la demanda, medidas administrativas y reguladoras o instrumentos basados en el mercado (véase el anexo II). Asimismo, podrán tenerse en cuenta los resultados de las evaluaciones *ex post* descritas en el apartado 8 para evaluar la idoneidad de la medida de ayuda propuesta.

5.2.3.5 Buenas prácticas: papel de las ANR, las ANC, los centros nacionales de competencias y las oficinas competentes en materia de banda ancha

- 112) El papel de las autoridades nacionales reguladoras es particularmente importante en el diseño de las medidas de ayuda estatal idóneas para apoyar la banda ancha. Las ANR han adquirido conocimientos técnicos y experiencia gracias al papel fundamental que les asigna la regulación sectorial y son las más indicadas para apoyar a las autoridades públicas en el diseño de las medidas de ayuda estatal.
- 113) Se anima a los Estados miembros a consultar sistemáticamente a las ANR sobre el diseño de las medidas de ayuda estatal y, en particular, aunque no solo, sobre: la determinación de las zonas objetivo (mapa detallado y consulta pública), la evaluación del cambio considerable, los productos de acceso mayorista, las condiciones y la determinación de precios, los mecanismos de resolución de conflictos, así como en caso de litigio en relación con cualquiera de esos aspectos. Se anima a los Estados miembros a que faciliten las competencias y recursos adecuados a las ANR para que puedan desempeñar esta función de apoyo. Cuando sea necesario, los Estados miembros deberían establecer una base jurídica adecuada para esta participación de las autoridades nacionales reguladoras en los proyectos de ayudas estatales a la banda ancha⁸¹.
- 114) En consonancia con las mejores prácticas, sin perjuicio de las competencias de las ANR en virtud del marco regulador, las ANR pueden dar directrices a las autoridades locales, entre otras cosas, sobre la realización de análisis de mercado y las definiciones

⁸¹ Cuando la ANR haya recibido las competencias necesarias con arreglo a la legislación nacional para su participación en proyectos de ayuda estatal a la banda ancha, el Estado miembro debería enviarle una descripción detallada de las medidas de ayuda y las características pertinentes, al menos dos meses antes de la notificación de la ayuda estatal, con el fin de que la ANR disponga de un plazo razonable para emitir su dictamen.

de los productos de acceso mayorista y la fijación de precios. Dichas directrices deben tener en cuenta el marco regulador y las recomendaciones formuladas por la Comisión⁸².

- 115) Además de la implicación de las ANR, los Estados miembros también pueden consultar a las autoridades nacionales de competencia (ANC), por ejemplo, para que les asesoren sobre cómo crear condiciones de competencia equitativas para los operadores y evitar que una proporción exageradamente elevada de los fondos públicos se destine a un solo operador, reforzando así su posición de mercado (que posiblemente ya sea dominante)⁸³.
- 116) Los Estados miembros podrán crear centros nacionales de competencias u oficinas competentes en materia de banda ancha que puedan ayudar a las autoridades a diseñar medidas de ayuda estatal adecuadas y garantizar la coherencia en la aplicación de las medidas, sujetas a las normas sobre ayudas estatales que entran en el ámbito de aplicación de las presentes Directrices⁸⁴.

5.2.4 *Proporcionalidad de la medida de ayuda*

- 117) Los Estados miembros deben demostrar que la ayuda es proporcionada al problema abordado, demostrando esencialmente que no se obtendría el mismo cambio de comportamiento (como en el caso del efecto incentivador) con menos ayuda y menos falseamientos. La ayuda se considera proporcionada si su importe se limita al mínimo necesario y se minimiza el falseamiento potencial de la competencia, de conformidad con los apartados 5.2.4.1 a 5.2.4.7.

5.2.4.1 Procedimiento de selección competitivo

- 118) Una medida de ayuda se considera proporcionada si su importe se limita al mínimo necesario para el desarrollo de la actividad económica objeto de la ayuda.
- 119) La ayuda debe asignarse a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas sobre la base de un procedimiento de selección competitivo abierto, transparente y no discriminatorio, en consonancia con los principios de contratación pública⁸⁵ y respetando el principio de neutralidad tecnológica, como se especifica en el

⁸² Esto aumentaría la transparencia, reduciría la carga administrativa que pesa sobre las autoridades locales y podría suponer que las autoridades nacionales reguladoras no tuvieran que analizar cada asunto de ayuda estatal de forma individual.

⁸³ Véase, por ejemplo, el dictamen n.º 12-A-02, de 17 de enero de 2012, relativo a una solicitud de dictamen de la Comisión de Economía, Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio del Senado francés relativo al marco de intervención de las colectividades territoriales en materia de despliegue de redes de muy alta velocidad.

⁸⁴ Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión K (2008) 6705 de 5 de noviembre de 2008, en el asunto N 237/08 — Alemania — Ayuda a la banda ancha en Baja Sajonia (DO C 18 de 24.1.2009, p. 1); Decisión de la Comisión C(2012) 8223 final, de 20 de noviembre de 2012, en el asunto SA.33671 (2012/N) — Reino Unido — Régimen nacional de banda ancha para el Reino Unido — Banda ancha en el Reino Unido (DO C 16 de 19.1.2013, p. 2) y Decisión de la Comisión C(2016) 3208 final, de 26 de mayo de 2016, en el asunto SA 40720 (2016/N) — Reino Unido — Banda ancha en el Reino Unido (DO C 323 de 2.9.2016, p. 2).

⁸⁵ Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65) y Directiva

apartado 5.2.4.2, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública.

- 120) La ayuda se considera proporcionada y se limita al importe mínimo necesario si se concede mediante un procedimiento de selección competitiva que atraiga a un número suficiente de participantes. Cuando el número de participantes no sea suficiente, el Estado miembro debe confiar a un auditor independiente la evaluación de la oferta (incluidos los cálculos de costes) presentada por el adjudicatario.
- 121) Dependiendo de las circunstancias, pueden ser adecuados varios procedimientos. En el caso de los proyectos de gran complejidad técnica, o cuando proceda por algún otro motivo, los Estados miembros pueden iniciar un procedimiento de diálogo competitivo con los posibles licitadores, con el fin de garantizar el diseño más adecuado del proyecto.
- 122) El Estado miembro debe asegurarse de que se selecciona la solución económicamente más ventajosa. A tal fin, el Estado miembro debe establecer criterios de adjudicación cualitativos objetivos, transparentes y no discriminatorios y especificar de antemano la valoración relativa de cada criterio. Los criterios de adjudicación cualitativos deben ser ponderados en relación con el importe de la ayuda solicitada. En condiciones de calidad similares, si no idénticas, debe concederse la ayuda al licitador que solicite el importe de ayuda más bajo.
- 123) Algunos de los criterios de adjudicación cualitativos pueden ser, entre otros, el rendimiento de la red (incluida su seguridad), la cobertura geográfica, las perspectivas de futuro del enfoque tecnológico, el impacto de la solución propuesta en la competencia (incluidas las condiciones y precios del acceso mayorista)⁸⁶ y el coste total de la propiedad⁸⁷.
- 124) También se anima a los Estados miembros a que consideren criterios relativos al comportamiento climático y medioambiental de la red. Algunos de estos criterios son, por ejemplo, el impacto climático y medioambiental de la red⁸⁸, o la conformidad de la medida con la normativa nacional y de la UE en materia de clima y medio ambiente. Los Estados miembros también podrán incluir obligaciones para que el licitador seleccionado aplique medidas de mitigación en caso de que la red pueda afectar negativamente al medio ambiente.

2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 28.3.2014, p. 1).

⁸⁶ Por ejemplo, las topologías de red que permiten una separación plena y efectiva recibirían más puntos.

⁸⁷ El coste total de la propiedad lo consideran, por ejemplo, las empresas cuando quieren invertir en proyectos de capital. El coste total de la propiedad incluye la inversión inicial, así como todos los gastos directos e indirectos a largo plazo. Aunque es fácil informar de la inversión inicial, en la mayoría de los casos las empresas intentan analizar todos los posibles gastos indirectos que pueden tener una influencia significativa en la decisión de invertir.

⁸⁸ Por ejemplo, del consumo de energía o del ciclo de vida de la inversión, teniendo en cuenta los criterios de «No causar un perjuicio significativo» introducidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía).

- 125) Cuando la ayuda se conceda sin un procedimiento de selección competitivo a una autoridad pública para desplegar y gestionar una red de banda ancha a nivel mayorista⁸⁹ directamente, o a través de una entidad interna (modelo de inversión directa), el Estado miembro también debe justificar su elección de red y solución tecnológica⁹⁰.
- 126) Cualquier concesión u otra atribución por parte de dicha autoridad pública o entidad interna a un tercero para diseñar, construir o explotar la red debe adjudicarse mediante un procedimiento de selección competitivo abierto, transparente y no discriminatorio, en consonancia con los principios de contratación pública y respetando el principio de neutralidad tecnológica, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de contratación pública, sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa.

5.2.4.2 Neutralidad tecnológica

- 127) El principio de neutralidad tecnológica exige que la intervención pública no favorezca ni excluya a ninguna tecnología concreta, ni en la selección de los beneficiarios ni en la prestación de acceso mayorista. Como existen diferentes soluciones tecnológicas, la licitación no debería favorecer ni excluir a ninguna tecnología o plataforma de red particulares. Los licitadores deberían poder proponer la prestación de los servicios solicitados utilizando o combinando cualquier tecnología que consideren adecuada. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros determinen previamente el rendimiento deseado, incluida la eficiencia energética de las redes, y concedan puntos prioritarios a la solución tecnológica o combinación de soluciones tecnológicas más adecuadas sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, de conformidad con el apartado 5.2.4.1. Una red de comunicaciones electrónicas financiada por el Estado debe permitir el acceso en condiciones equitativas y no discriminatorias a todos los solicitantes de acceso, independientemente de la tecnología utilizada.

5.2.4.3 Utilización de infraestructuras existentes

- 128) La reutilización de la infraestructura existente es uno de los principales factores determinantes para reducir el coste global del despliegue de una nueva red de banda ancha y limitar su impacto negativo en el medio ambiente⁹¹.

⁸⁹ El beneficiario de la ayuda podrá estar autorizado a prestar servicios minoristas como «comercializador de último recurso» cuando un consumidor no pueda obtener un servicio minorista del mercado. Véase la Decisión de la Comisión C(2016) 8069 final, de 15 de noviembre de 2019, en el asunto SA.54472 (2019/N) – Irlanda – Plan Nacional de Banda Ancha (DO C 7 de 10.1.2020, p.1).

⁹⁰ Véase la Decisión de la Comisión C(2018)6613 final, de 12 de octubre de 2018, en el asunto SA.49614 (2018/NN) – Lituania – Development of Next Generation Access Infrastructure – RAIN 3 (DO C 424 de 23.11.2018, p.8); Decisión de la Comisión C(2016) 3931 final, de 30 de junio de 2016, en el asunto SA.41647 – Italia – Strategia Banda Ultralarga (DO C 258 de 15.7.2016, p. 4). Decisión de la Comisión C(2019) 6098 final, de 20 de agosto de 2019, en el asunto SA.52224 – Austria – Proyecto de banda ancha en Carintia (DO C 381 de 8.11.2019, p. 7).

⁹¹ En la Directiva sobre la reducción de costes de la banda ancha [(Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (DO L 155 de 23.5.2014, p. 1)], se citan ejemplos de medidas para reducir los costes del despliegue de redes y su impacto en el medio ambiente.

- 129) Los Estados miembros deben crear una base de datos nacional sobre la disponibilidad de infraestructuras existentes que puedan reutilizarse para el despliegue de la banda ancha, incluidos los activos de infraestructura comerciales y aquellos propiedad de organismos públicos.
- 130) Los Estados miembros deben incluir en los documentos del procedimiento de selección competitivo toda la información sobre la infraestructura existente disponible, identificada a partir de la base de datos nacional, completada o actualizada con el mapa detallado y el ejercicio de consulta pública.
- 131) Los Estados miembros deberían animar a los operadores que participan en un procedimiento de selección competitivo (licitadores) a recurrir a las infraestructuras existentes disponibles, con el fin de evitar la duplicación innecesaria y onerosa de recursos y de reducir el importe de la financiación pública. Podría incluir, entre otras cosas: la utilización de la infraestructura propia del operador; la utilización de la infraestructura de otros operadores (incluidos los productos regulados⁹²); la utilización de las infraestructuras de otros servicios públicos existentes (entre otras, por ejemplo, las conducciones de agua y de alcantarillado y la infraestructura eléctrica pertinente); la reutilización de mástiles de radio; infraestructura pública, etc.
- 132) Todo operador que posea o controle una infraestructura (con independencia de que sea realmente utilizada) en la zona objetivo y que desee participar en la licitación debe:
- a) informar a la autoridad que concede la ayuda y a la ANR sobre dicha infraestructura durante la cartografía y el ejercicio de consulta pública;
 - b) comprometerse a poner la infraestructura a disposición de otros operadores en sus ofertas; y
 - c) proporcionar información adecuada sobre el uso de dicha infraestructura (incluidas las condiciones y precios).
- 133) La información indicada en el apartado 132) c) debe facilitarse con la suficiente antelación para que pueda ser tenida efectivamente en cuenta en las ofertas de otros operadores y para que pueda facilitarse cualquier aclaración o información que falte. En cualquier caso, la información debe facilitarse al menos dos meses antes de la fecha límite para la presentación de la oferta en el procedimiento de selección.
- 134) Los Estados miembros podrán consultar a la ANR sobre la idoneidad de las condiciones y precios propuestos por los operadores para el uso de la infraestructura existente, con el fin de verificar que las condiciones no son prohibitivas ni pueden obstaculizar el uso de dicha infraestructura.

⁹² Cuando se acceda a la red existente utilizando un producto disponible como consecuencia de obligaciones reguladoras, las limitaciones que conlleva el uso de dicho producto de acceso regulado se tendrán en cuenta en la evaluación de la propuesta en el proceso de selección competitiva. Solo los licitadores que no posean o controlen esa red existente regulada podrán utilizar un producto de acceso regulado en su oferta. Véase la Decisión de la Comisión C(2016) 3208 final, de 26 de mayo de 2016, en el asunto SA 40720 (2016/N) – Reino Unido - Banda ancha en el Reino Unido (DO C 323 de 2.9.2016, p. 2).

5.2.4.4 Acceso mayorista

- 135) El acceso mayorista efectivo de terceros a las redes financiadas por el Estado es un componente indispensable de toda medida de ayuda estatal. En particular, permite a operadores terceros competir con el licitador elegido, reforzando con ello la oferta y la competencia en las zonas afectadas por la medida y evitando, al mismo tiempo, la creación de servicios regionales monopolísticos. Al permitir que se desarrolle la competencia en la zona objetivo, también garantiza el desarrollo del mercado en dicha zona a largo plazo. Esta condición no está supeditada a ningún análisis previo de mercado con arreglo al capítulo III de la Directiva (UE) 2018/1972. El tipo de obligaciones de acceso mayorista impuestas a una red financiada por el Estado debería corresponder al conjunto de obligaciones de acceso definidas en el Reglamento sectorial. No obstante, los beneficiarios de la ayuda deberían ofrecer una mayor gama de productos de acceso mayorista que los impuestos por las autoridades nacionales reguladoras a los operadores que tienen un poder de mercado significativo, ya que el beneficiario de la ayuda no solo utiliza sus propios recursos, sino el dinero de los contribuyentes para desplegar la red. Este acceso mayorista debería concederse con la mayor antelación posible antes de empezar a prestar los servicios pertinentes y, cuando el operador de red también tenga intención de prestar servicios minoristas, al menos seis meses antes de la puesta en marcha de los servicios minoristas.
- 136) La red financiada por el Estado debe ofrecer un acceso efectivo en condiciones equitativas y no discriminatorias a todos los operadores que lo soliciten. Esto puede implicar la mejora y el aumento de la capacidad de la infraestructura existente cuando sea necesario y el despliegue de infraestructuras nuevas suficientes (por ejemplo, conducciones lo bastante anchas como para albergar un número suficiente de redes que no pueden ser inferiores a tres y diferentes topologías de red)⁹³.

5.2.4.4.1 Productos de acceso mayorista

5.2.4.4.1.1 Redes de acceso fijo desplegadas en zonas blancas y grises

- 137) La red financiada por el Estado debe garantizar el acceso indirecto, el acceso desagregado virtual («VULA»⁹⁴), el acceso a distribuidores en la calle, postes/mástiles/torres, conductos y fibra oscura⁹⁵.

⁹³ Dependiendo del tipo de intervención, puede incluir: conducciones del tamaño adecuado, número suficiente de fibras oscuras, tipo y mejora de postes/mástiles/torres, tipo y tamaño de los distribuidores en la calle para proporcionar una desagregación efectiva, etc. Véanse la Decisión de la Comisión C(2016) 3208 final, de 26 de mayo de 2016, en el asunto SA 40720 (2016/N) – Reino Unido - Banda ancha en el Reino Unido (DO C 323 de 2.9.2016, p. 2) y la Decisión de la Comisión C(2019) 8069 final, de 15 de noviembre de 2019, en el asunto SA.54472 (2019/N) – Irlanda – Plan Nacional de Banda Ancha (DO C 7 de 10.1.2020, p.1).

⁹⁴ Para poder optar a la ayuda estatal, cualquier producto VULA debe haber recibido la aprobación previa de la ANR competente.

⁹⁵ Los operadores de red de acceso inalámbrico fijo («FWA») tienen que dar acceso a su infraestructura física. Esto incluye la concesión de acceso a mástiles/torres a los operadores sobre una base no discriminatoria.

5.2.4.4.1.2 Redes de acceso fijo desplegadas en zonas negras que ofrezcan velocidad mejorada de carga.

- 138) En las zonas negras ultrarrápidas y para las redes que ofrecen velocidad mejorada de carga (véase el apartado 5.2.3.1.4), la red financiada por el Estado debe proporcionar una desagregación física total y efectiva, además de lo previsto para las zonas blancas y grises.

5.2.4.4.1.3 Redes de acceso móviles

- 139) Para las intervenciones de apoyo a las redes de acceso móvil, la red financiada por el Estado debe ofrecer⁹⁶ la gama más amplia de productos de acceso mayorista, incluidos, entre otros, el acceso indirecto, el acceso a postes/mástiles/torres y, a medida que estén disponibles, los productos de acceso necesarios para explotar las características más avanzadas⁹⁷ de las redes 5G y futuras generaciones móviles⁹⁸. El acceso efectivo puede incluir el acceso a componentes de la red que no hayan sido financiados con fondos estatales pero que sean necesarios para que el solicitante de acceso pueda prestar sus servicios⁹⁹.

5.2.4.4.1.4 Redes de retorno

- 140) Para las intervenciones en redes de retorno, la red financiada por el Estado debe garantizar el acceso indirecto y el acceso a postes/mástiles/torres, conducciones y fibra oscura.
- 141) La red financiada por el Estado debe ofrecer un acceso efectivo en condiciones equitativas y no discriminatorias a todos los operadores que lo soliciten. En consonancia con el apartado 136), esto puede implicar el despliegue de suficiente infraestructura nueva (por ejemplo, conducciones lo bastante anchas que permitan el despliegue de fibra oscura suficiente para satisfacer las necesidades previsibles de todos los operadores del mercado).

5.2.4.4.2 Condiciones de acceso mayorista

- 142) Debe concederse acceso mayorista efectivo durante al menos diez años para todos los productos activos excepto VULA.
- 143) El acceso basado en VULA debe concederse durante un período de tiempo igual a la vida útil de la infraestructura pasiva a la que sustituye VULA¹⁰⁰.

⁹⁶ Incluidos los solicitantes de acceso FWA.

⁹⁷ Como la itinerancia, la red de acceso por radio multioperador (MORAN), la red troncal multioperador (MOCN) y la fragmentación de la red.

⁹⁸ Al conceder la ayuda, los Estados miembros deben asegurarse de que los mástiles y las torres tengan la dimensión adecuada para garantizar que pueda concederse dicho acceso.

⁹⁹ El acceso efectivo implica que el solicitante de acceso es capaz de transmitir señales desde el mástil o la torre a la red de retorno a la que están conectados el mástil o la torre.

¹⁰⁰ Dado que VULA se considera un sustituto de la desagregación física de una nueva infraestructura pasiva, se aplican las mismas normas que para las nuevas infraestructuras pasivas.

- 144) El acceso a nuevas infraestructuras pasivas (como conducciones, postes, distribuidores, fibra oscura, etc.) debe concederse durante la vida útil del elemento de red de que se trate¹⁰¹. Si la ayuda estatal se concede para nuevas infraestructuras pasivas, la infraestructura pasiva debe ser lo bastante ancha para permitir al menos tres redes y diferentes topologías de red¹⁰². Esto se entiende sin perjuicio de cualquier otra obligación reguladora similar que pueda imponer la ANR en el mercado de referencia específico para fomentar la competencia efectiva, o de las medidas adoptadas durante el mismo período o después de que expire el período de diez años.
- 145) Los Estados miembros deben consultar a las ANR sobre los productos de acceso mayorista, las condiciones y los precios, y se anima a las ANR a que proporcionen orientaciones, como se indica en el apartado 5.2.3.5.
- 146) Las mismas condiciones de acceso deben aplicarse a la totalidad de la red financiada por el Estado, incluidas las partes de la red en las que se hayan utilizado infraestructuras existentes¹⁰³. Las obligaciones de acceso deben ser ejecutadas con independencia de cualquier cambio en la propiedad, la gestión o el funcionamiento de la red financiada por el Estado.
- 147) Utilizando sus propios recursos, el beneficiario de la ayuda o los solicitantes de acceso que se conecten a la red financiada por el Estado podrán ampliar la red a zonas adyacentes. Se entenderá por zonas adyacentes aquellas zonas situadas fuera de la zona objetivo. Los solicitantes de acceso podrán llevar a cabo dichas ampliaciones sobre la base de la condición de acceso mayorista. Si no están vinculados al beneficiario de la ayuda, no hay limitación para sus ampliaciones privadas.
- 148) Al llevar a cabo una consulta pública en la que se encueste sobre la red existente o prevista en la zona objetivo (véase el apartado 5.2.2.3), el Estado miembro debe indicar que se permiten ampliaciones privadas en una fase posterior, a menos que las partes interesadas de una zona adyacente se opongan a tales ampliaciones durante el proceso de consulta pública.
- 149) Si, en el mapa detallado y en la consulta pública, las partes interesadas demuestran que la ampliación prevista entra en una zona adyacente en la que ya se dispone de al menos dos redes independientes que proporcionan una velocidad comparable a la de la red financiada por el Estado, o que existe al menos una red comparable en la zona

¹⁰¹ Véase la Decisión de la Comisión C(2019) 8069 final, de 15 de noviembre de 2019, en el asunto SA.54472 (2019/N) – Irlanda – Plan Nacional de Banda Ancha (DO C 7 de 10.1.2020, p.1). Siempre que el beneficiario de la ayuda decida mejorar o sustituir la infraestructura pasiva antes de que expire el período de vida útil de la infraestructura objeto de la ayuda, tendrá que seguir dando acceso a la nueva infraestructura durante toda la vida útil de la infraestructura original.

¹⁰² Por ejemplo, cuando se construyan nuevas conducciones, estas deberían tener cabida para, al menos, tres cables independientes, cada uno de ellos capaz de albergar al menos a varios operadores. Cuando la infraestructura existente tenga limitaciones de capacidad y no pueda proporcionar acceso, al menos, a tres cables independientes, según el principio de «orden de llegada», el operador de la red financiada con fondos estatales tiene que poner a disposición de los solicitantes de acceso al menos el 50 % de la capacidad existente.

¹⁰³ Por ejemplo, el uso del acceso mayorista por terceros no puede limitarse únicamente a la prestación de servicios de banda ancha minoristas.

adyacente que empezó a funcionar menos de cinco años antes de que lo hiciera la red financiada por el Estado, la ampliación privada a dicha zona adyacente solo podrá llevarse a cabo dos años después de la entrada en funcionamiento de la red financiada por el Estado¹⁰⁴.

150) Como excepción a lo dispuesto en el apartado 5.2.4.4.1, en determinadas circunstancias, los Estados miembros podrán limitar el suministro de determinados productos de acceso que aumentarían desproporcionadamente los costes de inversión sin ofrecer beneficios significativos en cuanto al aumento de la competencia a los casos de demanda razonable de un solicitante de acceso. Estas excepciones son posibles con las siguientes condiciones:

- a) la zona en cuestión es una zona de baja densidad de población, en la que los servicios de banda ancha son limitados, o en la que los beneficiarios de la ayuda son pequeñas empresas locales¹⁰⁵;
- b) el acceso no puede limitarse sobre la base de una demanda razonable en zonas densamente pobladas en las que quepa esperar que se desarrolle la competencia en materia de infraestructuras; en tales zonas, la red financiada por el Estado debería ofrecer todo tipo de productos de acceso a la red;
- c) los Estados miembros deben demostrar el aumento desproporcionado de los costes de cada producto de acceso de que se trate mediante cálculos de costes detallados y objetivos;
- d) la demanda se considera razonable si: i) el solicitante de acceso establece un plan de negocios coherente que justifique el desarrollo del producto en la red financiada por el Estado; ii) en la misma zona geográfica ningún otro operador ofrece ningún producto de acceso comparable a precios equivalentes a los de las zonas más densamente pobladas¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Estas normas también se aplican en el caso de las conexiones a redes de retorno financiadas con fondos estatales o en el caso de redes móviles financiadas con fondos estatales que se utilizan posteriormente para FWA en zonas que ya están cubiertas por redes fijas.

¹⁰⁵ Véanse, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2011) 7285 final, de 19 de octubre de 2011, en el asunto N 330/2010 — Francia — Programa nacional de muy alta velocidad - Parte B (DO C 364 de 14.12.2011, p. 2) y la Decisión de la Comisión C(2012) 8223 final, de 20 de noviembre de 2012, en el asunto SA.33671 (2012/N) — Reino Unido — Régimen nacional de banda ancha para el Reino Unido — Banda ancha en el Reino Unido (DO C 16 de 19.1.2013, p. 2).

¹⁰⁶ La Comisión podrá aceptar otras condiciones como parte del análisis de proporcionalidad habida cuenta de las características del asunto y el procedimiento general de sopesamiento. Véanse, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2011) 7285 final, de 19 de octubre de 2011, en el asunto N 330/2010 — Francia — Programa nacional de muy alta velocidad - Parte B (DO C 364 de 14.12.2011, p. 2) y la Decisión de la Comisión C(2012) 8223 final, de 20 de noviembre de 2012, en el asunto SA.33671 (2012/N) — Reino Unido — Régimen nacional de banda ancha para el Reino Unido — Banda ancha en el Reino Unido (DO C 16 de 19.1.2013, p. 2). Si se cumplen las condiciones se deberá otorgar el acceso en un plazo que sea habitual en el mercado concreto. En caso de conflicto, la autoridad que concede la ayuda puede solicitar el asesoramiento de la ANR o de cualquier otro organismo nacional competente.

- e) Si una solicitud de acceso cumple los requisitos enumerados en los apartados (150)a)-(150)d) el coste adicional de facilitar dicho acceso correrá a cargo del beneficiario de la ayuda¹⁰⁷.

5.2.4.4.3 Precios de acceso mayorista

- 151) Al fijar los precios de los productos de acceso mayorista, los Estados miembros deben velar por que el precio de acceso mayorista de cada producto se base en uno de los siguientes valores de referencia y principios de fijación de precios:
 - a) los precios mayoristas medios publicados prevalentes en otras zonas comparables, más competitivas, del Estado miembro o de la Unión; o
 - b) si dichos precios no estuvieran publicados, los precios ya fijados o aprobados por las ANR para los mercados y servicios afectados; o
 - c) si no existen precios publicados o regulados, una orientación en función de los costes o la metodología establecida de acuerdo con el marco regulador sectorial.
- 152) Sin perjuicio de las competencias de la ANR en virtud del marco regulador, debería consultarse a la ANR sobre los productos de acceso mayorista y las condiciones del acceso mayorista, incluso sobre precios y litigios conexos, tal como se establece en el apartado 5.2.3.5.
- 153) Los Estados miembros deben indicar los productos de acceso mayorista, las condiciones y los precios en los documentos de la licitación y deben publicar esta información en un sitio web global sobre ayudas estatales, a nivel nacional o regional. El público en general debería poder acceder sin restricciones al sitio web, incluido el registro previo de usuarios.

5.2.4.5 Mecanismo de reembolso

- 154) A menudo, el importe de la ayuda para las medidas de apoyo al despliegue de redes fijas y móviles se establece sobre una base *ex ante*, para cubrir así la diferencia de financiación prevista durante la vida útil del proyecto.

¹⁰⁷ No podrán concederse ayudas adicionales para cubrir dichos costes de acceso.

- 155) En este caso, dado que la evolución de los costes e ingresos futuros suele estar rodeada de cierto grado de incertidumbre, los Estados miembros deberían supervisar pormenorizadamente la ejecución del proyecto de banda ancha durante toda la duración del proyecto y prever una cláusula de reembolso que permita tener debidamente en cuenta la información que el beneficiario de la ayuda no haya tenido en cuenta en el plan de negocios original al solicitar la ayuda estatal. Los factores que pueden repercutir en la rentabilidad del proyecto y que pueden resultar difíciles, o incluso imposibles, de establecer *ex ante* con la precisión adecuada son, por ejemplo: i) los costes reales de despliegue de la red; ii) los ingresos reales obtenidos de los servicios básicos; iii) la demanda real; y iv) los ingresos reales procedentes de servicios «accesorios»¹⁰⁸.
- 156) Los Estados miembros deben aplicar una cláusula de reembolso durante al menos la duración del proyecto si el importe de la ayuda al proyecto supera los 5 millones EUR, y deben establecer sus normas de forma transparente y clara *ex ante* (incluso en la documentación del procedimiento de selección competitivo).
- 157) No es necesario un reembolso cuando el proyecto se lleve a cabo mediante el modelo de inversión directa (véase el anexo III), en el que la autoridad pública construye y explota una red pública, exclusivamente mayorista, con el único objetivo de conceder un acceso equitativo y no discriminatorio a todos los operadores¹⁰⁹.
- 158) Dado que varios factores pueden tener un impacto positivo o negativo en el plan de negocios del beneficiario de la ayuda, la cláusula de reembolso debería diseñarse de manera que tenga en cuenta y equilibre dos objetivos: i) debería permitir al Estado miembro recuperar importes que excedan de un beneficio razonable¹¹⁰; ii) no debería poner en peligro los incentivos para que los operadores participen en una licitación¹¹¹

¹⁰⁸ Por ejemplo, una cláusula de reembolso puede ayudar a recuperar beneficios superiores a los previstos razonablemente, debidos, entre otras cosas, a: i) una demanda de productos de banda ancha superior a la prevista, lo que se traduce en beneficios adicionales y un menor déficit de inversión; y ii) unos ingresos superiores a lo previsto obtenidos de productos que no sean de banda ancha, lo que se traduce en beneficios adicionales y un déficit de inversión menor (por ejemplo, los ingresos obtenidos de nuevos productos de acceso mayorista). Véase la Decisión de la Comisión C(2016) 3208 final, de 26 de mayo de 2016, en el asunto SA 40720 (2016/N) – Reino Unido - Banda ancha en el Reino Unido (DO C 323 de 2.9.2016, p. 2).

¹⁰⁹ Una cláusula de reembolso también puede ser adecuada en determinados modelos de propiedad pública, en los que una cláusula de este tipo podría basarse en una comparación *ex post* del valor actual neto de la rentabilidad efectiva del beneficiario según las cuentas del proyecto al final del contrato con la rentabilidad prevista del beneficiario según el modelo de proyecto incluido en el contrato. Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2016) 3208 final, de 26 de mayo de 2016, en el asunto SA 40720 (2016/N) – Reino Unido - Banda ancha en el Reino Unido (DO C 323 de 2.9.2016, p. 2).

¹¹⁰ Se entenderá por beneficio razonable la tasa de rendimiento del capital que requeriría una empresa típica, teniendo en cuenta el nivel de riesgo específico del sector de la banda ancha y el tipo de servicios prestados. La tasa de rendimiento del capital exigida viene determinada normalmente por el coste medio ponderado del capital («CMPC»).

¹¹¹ La participación en la licitación depende de los beneficios y pérdidas esperados. Pueden producirse pérdidas, por ejemplo, si el operador ha sido demasiado optimista con respecto a los ingresos futuros previstos derivados de la prestación de servicios de banda ancha o si surgen costes imprevistos. Dado que la autoridad que concede la ayuda no reembolsa pérdidas inesperadas, una cláusula de reembolso estricta sobre beneficios futuros puede aumentar el riesgo global para el inversor y desalentar la participación en la licitación.

y se esfuercen por conseguir eficiencias de costes (incremento de la eficiencia) al desplegar la red. Para lograr un equilibrio adecuado entre ambos objetivos, los Estados miembros deberían introducir criterios de incentivación relacionados con el aumento de la eficiencia productiva¹¹².

- 159) El importe del incentivo debe fijarse en un máximo del 30 % del beneficio razonable. Los Estados miembros no deberían recuperar ningún beneficio adicional por debajo de ese umbral (es decir, el beneficio razonable incrementado por el importe del incentivo¹¹³). Todo beneficio que supere el umbral del 30 % debe repartirse entre el beneficiario de la ayuda y el Estado miembro, sobre la base de la intensidad de ayuda derivada del resultado del procedimiento de selección competitivo¹¹⁴.
- 160) Las cláusulas de reembolso también deben tener en cuenta los beneficios obtenidos de otras transacciones relacionadas con la red financiada por el Estado. Por ejemplo, cuando se cree una empresa específicamente para construir o explotar la red financiada por el Estado, si un accionista existente de esta empresa vende la totalidad o parte de sus acciones en la empresa dentro del plazo de siete años a partir de la finalización de la red, o de 10 años a partir de la adjudicación de la licitación, el Estado miembro debe recuperar cualquier importe del producto de la venta que supere el precio con el que el accionista actual obtendría un beneficio razonable¹¹⁵.
- 161) En todos los casos, los importes recuperados deben devolverse al Estado miembro. Los Estados miembros pueden decidir reinvertir los importes recuperados en la ampliación de la red en las mismas condiciones que con arreglo a la medida de ayuda estatal original (por ejemplo, para financiar nuevos proyectos en el marco de un régimen de ayudas estatales aprobado).

5.2.4.6 Separación contable

- 162) Para garantizar que la ayuda siga siendo proporcionada y no dé lugar a una compensación excesiva o a la subvención cruzada de actividades que no reciben ayuda, el beneficiario de la ayuda debe garantizar la separación contable entre los fondos utilizados para la construcción y la explotación de la red y otros fondos a su disposición.

5.2.4.7 Transparencia de la ayuda

- 163) Los Estados miembros deben cumplir los requisitos establecidos en el apartado 7.

¹¹² El incremento de la eficiencia no reducirá la calidad de los servicios prestados.

¹¹³ Si el beneficio razonable es del 10 %, el importe del incentivo sería del 3 %. Los Estados miembros no recuperarán ningún beneficio inferior al 13 %.

¹¹⁴ Por ejemplo, si el beneficio real es del 20 % y el beneficio razonable es del 10 %, el importe del incentivo es del 3 %. La intensidad de ayuda es del 70 %: los Estados miembros no recuperarán ningún beneficio inferior al 13 %. Del 13 % al 20 %, el beneficio se repartirá: el 70 % para el Estado miembro y el 30 % para el inversor en la banda ancha.

¹¹⁵ Supongamos que un accionista posee el 20 % de las acciones de la empresa subvencionada cuyo beneficio razonable calculado (según la nota a pie de página 114) es del 10 %. El valor actual neto (VAN) de la empresa que utiliza el 10 % como tipo de actualización es X. Si el accionista vende sus acciones a Y, el Estado miembro recuperará del accionista $Y - 20 \% * X$.

5.2.5 Efectos negativos para la competencia y el comercio

- 164) Las ayudas para el despliegue de redes fijas y móviles pueden tener efectos negativos en términos de falseamientos del mercado e impacto en el comercio entre Estados miembros.
- 165) La Comisión evalúa la magnitud del falseamiento de la competencia y sus efectos para el comercio atendiendo a sus efectos en los competidores. De hecho, si, como consecuencia de la concesión de la ayuda, los competidores ven cómo la rentabilidad de sus inversiones previas disminuye, pueden decidir reducir sus propias inversiones futuras, simplemente retirarse del mercado o no entrar en un nuevo mercado o zona geográfica¹¹⁶. El apoyo público también puede animar a los proveedores de servicios locales a recurrir a los servicios ofrecidos por la red financiada por el Estado en lugar de a otras soluciones de mercado. Además, cuando el beneficiario de la ayuda sea probablemente una empresa que ya se encuentre en posición dominante en un mercado o pueda pasar a ocupar una posición dominante gracias a la inversión pública, la ayuda podría reducir la presión competitiva que pueden ejercer los competidores. Incluso en los casos en que el falseamiento puede considerarse limitado a nivel individual, de forma acumulativa, los regímenes de ayuda podrían dar lugar a elevados niveles de falseamiento.

5.2.6 Ponderación de los efectos positivos de la ayuda con los efectos negativos sobre la competencia y el comercio

- 166) La Comisión sopesará los efectos positivos de la medida de ayuda prevista en las actividades económicas que reciben apoyo con sus efectos negativos detectados sobre la competencia y las condiciones del comercio. Para que la ayuda sea compatible con el mercado interior, los efectos positivos de la medida de ayuda deben compensar sus efectos negativos.
- 167) En primer lugar, la Comisión evalúa los efectos positivos de la medida de ayuda en las actividades económicas subvencionadas, incluida su contribución a los objetivos de la política digital. El Estado miembro debe demostrar, sobre la base de un análisis contrafáctico, que la medida tiene efectos positivos en comparación con lo que habría ocurrido sin la ayuda. Como se ha indicado en el apartado 5.2.1, los efectos positivos pueden incluir la consecución de los objetivos deseados, como el despliegue de una nueva red que proporcione capacidad y velocidad adicionales en el mercado, así como precios más bajos y más posibilidades de elección para los consumidores, mayor calidad e innovación. Ello produciría también que los usuarios finales tengan mayor acceso a los recursos en línea, lo que, junto con una mayor protección al consumidor en este ámbito, probablemente estimule un crecimiento de la demanda. También contribuirá a la realización del mercado único digital y beneficiará a la economía de la Unión en su conjunto.
- 168) Además, la Comisión también podrá tener en cuenta, cuando proceda, si la ayuda tiene otros efectos positivos, por ejemplo, la mejora de la eficiencia energética de las operaciones de la red. Cuando estos otros efectos positivos reflejen los efectos encarnados en las políticas de la Unión, como el Pacto Verde Europeo, también puede

¹¹⁶ Este tipo de efectos pueden denominarse «efecto de exclusión».

considerarse que la ayuda alineada con dichas políticas tiene efectos positivos más amplios.

- 169) En segundo lugar, la Comisión evalúa si los efectos negativos se limitan al mínimo necesario. Los Estados miembros deben demostrar que los efectos negativos se limitan al mínimo necesario. Los Estados miembros deberían tener en cuenta la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad de la medida de ayuda (secciones 5.2.2 a 5.2.4) y, por ejemplo, el tamaño de los proyectos, los importes de ayuda individuales y acumulativos, los beneficiarios previstos (por ejemplo, si el beneficiario tiene un peso significativo en el mercado), así como las características de las zonas objetivo (por ejemplo, el número de redes sólidas existentes o planificadas de forma creíble en una zona determinada). Para que la Comisión pueda evaluar los probables efectos negativos, se anima a los Estados miembros a presentar cualquier evaluación de impacto de que dispongan, así como las evaluaciones *ex post* realizadas de regímenes similares anteriores.
- 170) La Comisión considerará que una medida de ayuda es compatible con el mercado interior únicamente cuando los efectos positivos compensen los efectos negativos sobre la competencia y el comercio. En los casos en que la medida de ayuda propuesta no aborde de manera adecuada y proporcionada una deficiencia del mercado concreta, los efectos negativos de falseamiento de la competencia tenderán a superar sus efectos positivos. Por consiguiente, la Comisión probablemente concluya que la medida de ayuda propuesta es incompatible.

6 EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS A FAVOR DE LA DEMANDA

- 171) Si bien la disponibilidad de una red de comunicaciones electrónicas es un requisito previo para la posibilidad de abonarse a los servicios de acceso a internet, en algunos casos podría no ser suficiente para garantizar que se satisfagan las necesidades de los usuarios finales a las que se hace referencia en particular en los apartados 52) y 63) se materialicen los beneficios para la sociedad en su conjunto.
- 172) Esto puede deberse a la relativamente baja propensión de los usuarios finales a abonarse a los servicios de acceso a internet. Esta baja propensión puede deberse a diversas razones, entre ellas el impacto económico del coste de abonarse a los servicios de comunicaciones electrónicas para los usuarios finales en general, o para determinadas categorías de usuarios finales en situación de fragilidad en particular, y la percepción inexacta de los beneficios que aportará el abono a los servicios de banda ancha.
- 173) Las medidas a favor de la demanda, como los bonos, pueden ser útiles para subsanar una deficiencia específica del mercado en términos de demanda de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles. El acceso generalizado y asequible a la conectividad crea efectos externos positivos dada su capacidad de acelerar el crecimiento y la innovación en todos los sectores de la economía. Cuando no pueda garantizarse un acceso asequible a servicios de comunicaciones electrónicas adecuados debido, por ejemplo, a unos precios minoristas elevados, las ayudas estatales pueden contribuir a subsanar tal deficiencia del mercado. En tales casos, la concesión de ayudas estatales puede generar efectos positivos y es posible mejorar la eficiencia global.

- 174) Los regímenes de bonos tienen por objeto aumentar la aceptación (abonos) o, en determinadas circunstancias, incentivar a los usuarios finales a mantener el abono a servicios fijos o móviles.
- 175) Están concebidos para reducir los costes para los usuarios finales (por ejemplo, los costes de establecimiento y la cuota de abono durante un determinado período de tiempo). Pueden utilizarse para abonarse a nuevos servicios fijos o móviles o para mejorar los abonos vigentes.
- 176) Los bonos no equivaldrían a una ayuda con respecto a los usuarios finales, incluidos los consumidores individuales, si estos últimos no llevan a cabo una actividad económica que entre en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Los bonos pueden constituir una ayuda con respecto a los usuarios finales si estos realizan una actividad económica que entre en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ayuda podría ser *de minimis*, teniendo en cuenta el valor limitado de los bonos.
- 177) La jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que, cuando se concede una ventaja a usuarios finales, como los consumidores individuales que no realizan una actividad económica, también puede representar una ventaja concedida a otras empresas y constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado¹¹⁷. Estas otras empresas podrían ser operadores de comunicaciones electrónicas u otras empresas que acepten los bonos.
- 178) Los bonos pueden conferir una ventaja a los operadores de comunicaciones electrónicas que prestan servicios a los usuarios finales (y, en algunos casos, pueden ofrecer una ventaja a los operadores de redes) que podrán ofrecer servicios a través de las redes de comunicaciones electrónicas existentes a un mayor número de usuarios finales, reforzando su posición en el mercado¹¹⁸. Los proveedores y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas son empresas y están sujetos al control de las ayudas estatales si la ventaja que reciben supera los niveles *de minimis*.

6.1 Bonos sociales

- 179) Los bonos sociales tienen por objeto ayudar a determinados consumidores individuales a adquirir o mantener servicios fijos o móviles. Pueden considerarse compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 2, la letra a), del Tratado, como «las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales,

¹¹⁷ Sentencia del Tribunal General de 4 de marzo de 2009, Italia/Comisión; T-424/05, ECLI:EU:T:2007:367, apartado 108; sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de julio de 2011, Mediaset/Comisión, C-403/10 P, ECLI:EU:C:2011:533, apartado 81.

¹¹⁸ Sin perjuicio de la evaluación, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales, de las medidas adoptadas a nivel nacional en la ejecución de las obligaciones de servicio universal incluidas en el marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de la Unión [Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) (DO L 321 de 17.12.2018, p. 36)].

siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos»¹¹⁹.

- 180) Para ser compatibles con el artículo 107, apartado 2, letra a), del Tratado, estos bonos deben tener un carácter social y estar reservados a determinadas categorías de consumidores individuales (las empresas no pueden optar a ellos) cuyas circunstancias financieras justifiquen el pago de ayudas por razones sociales (por ejemplo, familias con bajos ingresos, estudiantes, escolares, etc.), por ejemplo para permitirles adquirir o mantener un abono fijo o móvil, con el fin de beneficiarse de la enseñanza a distancia, el teletrabajo, etc.
- 181) Las normas nacionales pueden disponer diversos medios de ejecución. Por ejemplo, el sistema de bonos podría prever pagos directamente a los usuarios finales o directamente al proveedor de servicios elegido por los usuarios finales.
- 182) Los costes subvencionables podrán ser las cuotas mensuales, los costes de establecimiento estándar¹²⁰ y el equipo terminal necesario del usuario final (módem/router) para el acceso a internet.
- 183) Los bonos solo deben utilizarse para abonarse a nuevos servicios fijos o móviles o mantener los ya existentes. No deben concederse bonos para cambiar de un proveedor a otro que ofrezca la misma calidad de servicio, con el fin de limitar los riesgos de comportamientos oportunistas que no estén en consonancia con el objetivo social de dichos bonos. Los bonos no deben utilizarse para mejorar un abono existente fijo o móvil, salvo que pueda demostrarse claramente que el rendimiento de los abonos actuales es incapaz de satisfacer las necesidades mínimas razonables de los usuarios finales.
- 184) El requisito de evitar cualquier discriminación relacionada con el origen de los productos se cumple al respetar el principio de neutralidad tecnológica. Los usuarios finales deben poder utilizar el bono para adquirir los servicios fijos o móviles elegibles de cualquier proveedor capaz de prestarlos, con independencia de la tecnología utilizada para prestar el servicio. La medida debe garantizar la igualdad de trato de todos los posibles proveedores de servicios y ofrecer a los consumidores finales la mayor variedad posible de proveedores. Para ello, el Estado miembro debe crear un registro en línea de todos los prestadores de servicios admisibles o aplicar un método alternativo equivalente para garantizar la apertura, transparencia y carácter no discriminatorio de la medida. Los usuarios finales deben tener la posibilidad de consultar el registro en línea para estar informados de todos los operadores que puedan prestar los servicios subvencionables. Todos los proveedores capaces de prestar los servicios fijos o móviles elegibles deben tener la posibilidad de ser incluidos en el registro en línea sobre la base de criterios objetivos y transparentes (por ejemplo, la capacidad de cumplir los requisitos mínimos para la prestación de los servicios fijos o móviles subvencionables). El registro en línea también puede proporcionar

¹¹⁹ Véase la Decisión de la Comisión C(2020) 8441 final, de 4 de diciembre de 2020, en el asunto SA.57357 (2020/N) – Grecia – Régimen de bonos de banda ancha para estudiantes (DO C 41 de 5.2.2021, p.4).

¹²⁰ Los costes estándar son los que se aplican a todos los usuarios finales independientemente de su situación específica.

información adicional para asesorar a los usuarios finales, como el tipo de servicio prestado por los distintos operadores.

- 185) Los regímenes de bonos sociales deben limitarse en el tiempo a un período razonable que no supere los tres años.
- 186) Los Estados miembros podrán aplicar salvaguardias adicionales para evitar falseamientos indebidos de la competencia y el posible uso indebido de los bonos por parte de usuarios finales u operadores de comunicaciones electrónicas. Pueden ser necesarias salvaguardias adicionales para garantizar que los bonos no se utilicen para adquirir servicios de acceso a internet fijos o móviles cuando otro miembro del mismo hogar ya esté abonado a un servicio adecuado.
- 187) Además, los Estados miembros deben cumplir los requisitos establecidos en el apartado 7 sobre transparencia, presentación de informes y supervisión.

6.2 Bonos de conectividad

- 188) Los bonos de conectividad pueden diseñarse para categorías más amplias de usuarios finales (por ejemplo, bonos para todos los ciudadanos o para determinadas empresas, como las pymes) con el fin de promover la demanda de servicios fijos o móviles que contribuyan al desarrollo de una actividad económica. Estas medidas pueden ser declaradas compatibles con el mercado interior sobre la base del artículo 107, apartado 3, letra c), del TFUE.
- 189) La Comisión considerará compatibles tales medidas si contribuyen al desarrollo de una actividad económica (primera condición) sin alterar indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común (segunda condición).

6.2.1 Primera condición

- 190) La Comisión considera que los sistemas de bonos que impulsan efectivamente la demanda de servicios fijos o móviles pueden facilitar el desarrollo de una serie de actividades económicas aumentando la conectividad y el acceso a los servicios de acceso a internet.
- 191) Para tener un efecto incentivador, el bono solo debe cubrir hasta el 50 % de los costes subvencionables. Los costes subvencionables podrán ser las cuotas mensuales, los costes de establecimiento estándar y el equipo terminal necesario del usuario final (módem/router) para el acceso a internet. Los costes del cableado en el interior de los edificios y un cierto despliegue limitado en la propiedad privada del usuario final o en la propiedad pública cercana a la propiedad privada del usuario final también podrán ser subvencionables en la medida en que sean necesarios y auxiliares para la prestación del servicio.
- 192) Las normas nacionales pueden disponer diversos medios de ejecución. Por ejemplo, el sistema de bonos podría prever pagos directamente a los usuarios finales o directamente al proveedor de servicios elegido por los usuarios finales.
- 193) Si una medida de ayuda estatal, las condiciones de la misma (incluido el modo de financiación cuando este forme parte integrante de la medida) o la actividad que

financia conllevan una infracción de una disposición o de un principio general del Derecho de la Unión, la ayuda no puede declararse compatible con el mercado interior¹²¹.

6.2.2 Segunda condición

- 194) Las ayudas estatales deberían ir destinadas a situaciones en las que puedan aportar una mejora importante que el mercado no sea capaz de lograr por sí mismo, es decir, cuando exista una deficiencia del mercado en términos de demanda. Por ejemplo, si la ayuda estatal para el fomento de la demanda de servicios de comunicaciones electrónicas fijas y móviles no se destina a una deficiencia del mercado en términos de demanda (por ejemplo, si los bonos se utilizan indebidamente para apoyar el despliegue en lugar de fomentar la demanda) o no respeta la neutralidad tecnológica, la ayuda en forma de bonos no sería un instrumento político adecuado y la medida podría alterar las condiciones de inversión y crear falseamientos perjudiciales para el buen funcionamiento de los mercados afectados. En tales casos, la ayuda en forma de bonos podría alterar indebidamente las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; la medida de ayuda para bonos de conectividad no puede declararse compatible con el mercado interior.
- 195) Los bonos pueden ser necesarios para apoyar la suscripción a un nuevo servicio o para mejorar el actual. Los bonos solo podrán utilizarse para mejorar un abono fijo o móvil existente en la medida en que no falseen indebidamente la competencia a nivel minorista y mayorista.
- 196) La Comisión considera que los bonos de conectividad tecnológicamente neutros también son proporcionados, ya que permiten a los usuarios finales adquirir los servicios con la mejor relación calidad-precio a cualquier proveedor capaz de prestarlos, independientemente de la tecnología utilizada para prestar el servicio. Por otra parte, tales medidas pueden limitar los efectos negativos sobre la competencia resultantes de la ayuda si garantizan la igualdad de trato de todos los proveedores de servicios posibles y ofrecen a los usuarios finales la mayor variedad posible de proveedores. Para ello, el Estado miembro debe crear un registro en línea de todos los prestadores de servicios admisibles o aplicar un método alternativo equivalente para garantizar la apertura, la transparencia y el carácter no discriminatorio de la medida. Los usuarios finales deben tener la posibilidad de consultar esa información sobre todos los operadores que puedan prestar los servicios subvencionables. Todos los proveedores capaces de prestar los servicios subvencionables deben tener la posibilidad de solicitar ser incluidos en el registro en línea o de utilizar cualquier método alternativo elegido por el Estado miembro sobre la base de criterios objetivos (por ejemplo, la capacidad de cumplir los requisitos mínimos para la prestación de los servicios fijos o móviles elegibles). El registro en línea (o el método alternativo elegido) también puede proporcionar información adicional para asesorar a los usuarios finales, como el tipo de servicio prestado por los distintos operadores.
- 197) Los bonos de conectividad solo deben estar disponibles para los usuarios finales en zonas en las que exista al menos una red¹²² capaz de prestar los servicios

¹²¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, apartado 44.

subvencionables, lo que debe verificarse mediante el mapa detallado y la consulta pública. El mapa detallado y la consulta pública deben abarcar la duración del régimen de bonos y deben llevarse a cabo en consonancia con las secciones 5.2.2.4.1 y 5.2.2.4.2, respectivamente. La consulta pública debe invitar a las partes interesadas a formular observaciones sobre las principales características de la medida, y no solo sobre la disponibilidad de redes en las zonas objetivo.

- 198) Los Estados miembros deben limitar los riesgos de que los regímenes de bonos falseen indebidamente la competencia. Para que la ayuda sea compatible, los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación del mercado para identificar a los proveedores elegibles presentes en la zona y recopilar información para calcular su cuota de mercado. La evaluación del mercado debe tener por objeto determinar si el régimen de bonos puede conferir una ventaja desproporcionada a algunos proveedores en detrimento de otros, posiblemente reforzando la posición dominante en el mercado (local). La evaluación del mercado también debe tener por objeto determinar la necesidad real de aplicar un régimen de bonos comparando la situación en la zona o zonas de intervención con la de otras zonas del Estado miembro o de la Unión. También pueden evaluarse las tendencias en la demanda por parte de los usuarios finales para llegar a una conclusión sobre la oportunidad de aplicar el régimen de bonos.
- 199) Para poder ser incluido en el régimen de bonos, cuando el operador esté integrado verticalmente y tenga una cuota de mercado minorista superior al 25 %, ese proveedor debe ofrecer a cualquier proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el mercado de acceso mayorista correspondiente al menos un producto de acceso mayorista capaz de garantizar que el solicitante de acceso pueda prestar de forma fiable los servicios subvencionables, en condiciones abiertas, transparentes y no discriminatorias. El precio del acceso mayorista debe fijarse según lo especificado en el apartado 5.2.4.4.3.
- 200) Se considerará que los sistemas de bonos de conectividad tienen efectos negativos limitados sobre la competencia si están circunscritos en el tiempo a un período razonable que no supere los dos años.
- 201) Además, los Estados miembros deben cumplir los requisitos establecidos en el apartado 7 sobre transparencia, presentación de informes y supervisión.

7 TRANSPARENCIA, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y SUPERVISIÓN

7.1 Transparencia

- 202) Los Estados miembros deben publicar la siguiente información en el módulo de transparencia de las concesiones de la Comisión¹²³ o en un sitio web general sobre ayudas estatales, a escala nacional o regional:

¹²² Podrá incluirse en la medida de ayuda para la red una medida de bonos destinada a aumentar la demanda de la futura red.

¹²³ «Búsqueda pública en la base de datos de las ayudas estatales», disponible en el siguiente sitio web: <https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=es>.

- a) el texto completo de la decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas aprobado o de la decisión individual y sus disposiciones de aplicación, o un enlace al mismo;
 - b) información sobre cada ayuda individual concedida que supere los 100 000 EUR, en consonancia con el anexo IV.
- 203) La información a que se refiere el apartado 202) b) se publicará en un plazo de seis meses a partir de la fecha de concesión de la ayuda o, en el caso de las ayudas en forma de ventajas fiscales, en el plazo de un año a partir de la fecha límite en que deba presentarse la declaración de impuestos¹²⁴.
- 204) Los Estados miembros deben organizar su sitio web general sobre ayudas estatales, al que se hace referencia en el apartado 202), de forma que permita acceder fácilmente a la información. En el caso de las ayudas ilegales, posteriormente declaradas compatibles, los Estados miembros deben publicar la información en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión de la Comisión por la que se declare la compatibilidad de la ayuda.
- 205) Con el fin de permitir la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en virtud del Tratado, la información debe estar disponible durante al menos diez años a partir de la fecha de concesión de la ayuda. La información debe publicarse en un formato de hoja de cálculo no propietario que permita buscar, extraer y descargar eficazmente los datos y publicarlos fácilmente en internet, por ejemplo, en formato CSV o XML. El público en general debe poder acceder sin restricciones al sitio web, incluido el registro previo de usuarios.
- 206) La Comisión publicará en su sitio web el enlace al sitio web nacional o regional sobre ayudas estatales a que se refiere el apartado 202).

7.2 Presentación de informes

- 207) De conformidad con el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo¹²⁵ y el Reglamento (CE) n.º 794/2004 de la Comisión¹²⁶, los Estados miembros presentarán a la Comisión informes anuales sobre cada medida de ayuda aprobada en virtud de las presentes Directrices.
- 208) Además de los informes anuales mencionados en el apartado 207), los Estados miembros deben presentar a la Comisión cada dos años un informe con la información clave sobre las medidas de ayuda aprobadas en virtud de las presentes Directrices, de conformidad con el anexo V. En el momento de la adopción de una decisión en

¹²⁴ En caso de que no se exija formalmente una declaración anual, el 31 de diciembre del ejercicio respecto del cual se concedió la ayuda se considerará la fecha de concesión a efectos de la codificación.

¹²⁵ Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9).

¹²⁶ Reglamento (CE) n.º 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1).

aplicación de las presentes Directrices, la Comisión podrá exigir información adicional relativa a la medida de ayuda.

7.3 Supervisión

- 209) Los Estados miembros deben llevar registros detallados de todas las medidas de ayuda. Esos registros deben contener toda la información necesaria para determinar que se cumplen todas las condiciones de compatibilidad establecidas en las presentes Directrices. Los Estados miembros deben conservar esos registros durante diez años desde la fecha de concesión de la ayuda y facilitarlos a la Comisión a petición de esta.

8 PLAN DE EVALUACIÓN *EX POST*

- 210) Para garantizar aún más que se limitan los falseamientos de la competencia y los intercambios, la Comisión puede exigir que ciertos regímenes tengan un límite temporal (normalmente de cuatro años o menos) y estén sujetos a una evaluación *ex post* para verificar: i) si se han cumplido las hipótesis y condiciones que condujeron a la decisión de compatibilidad; ii) la efectividad de la medida de ayuda a la vista de sus objetivos previamente definidos; iii) el efecto de la medida de ayuda sobre los mercados y la competencia y que no se manifiestan efectos distorsionadores durante la duración del régimen de ayuda que sean contrarios a los intereses de la Unión¹²⁷.
- 211) Puede ser necesaria una evaluación *ex post* para los regímenes con grandes presupuestos de ayuda, o de características nuevas, o cuando se prevean cambios importantes en el mercado, la tecnología o la normativa. En cualquier caso, la evaluación será necesaria para los regímenes con un presupuesto de ayuda estatal o un gasto contabilizado superior a 150 millones EUR en un año determinado o a 750 millones EUR a lo largo de su duración total —es decir, la duración combinada del régimen y cualquier régimen anterior que cubra un objetivo y una zona geográfica similares— a partir de la publicación de las Directrices. Habida cuenta de los objetivos de la evaluación y con el fin de no imponer una carga desproporcionada a los Estados miembros, las evaluaciones *ex post* solo son necesarias para los regímenes de ayudas cuya duración total sea superior a tres años, a partir de la publicación de las Directrices.
- 212) El requisito de evaluación *ex post* podrá no aplicarse a los regímenes de ayudas que sean sucesores inmediatos de un régimen que cubra un objetivo y una zona geográfica similares y que haya sido objeto de una evaluación, haya dado lugar a un informe de evaluación final con arreglo al plan de evaluación aprobado por la Comisión y no haya arrojado resultados negativos. Cuando el informe de evaluación final de un régimen no sea conforme al plan de evaluación aprobado, dicho régimen debe suspenderse con efecto inmediato a petición de la Comisión.
- 213) La evaluación debería tener por objeto comprobar si se cumplen las hipótesis y condiciones para la compatibilidad del régimen, en particular la necesidad y la eficacia de la medida de ayuda a la luz de sus objetivos generales y específicos. Asimismo, debe evaluar el impacto del régimen sobre la competencia y los intercambios.

¹²⁷ Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión C(2012) 8223 final, de 20 de noviembre de 2012, en el asunto SA.33671 (2012/N) – Reino Unido - Banda ancha en el Reino Unido (DO C 16 de 19.1.2013, p. 2).

- 214) En el caso de los regímenes de ayuda sujetos al requisito de evaluación mencionado en el apartado 211), los Estados miembros deben notificar un proyecto de plan de evaluación, que formará parte integrante de la evaluación del régimen por parte de la Comisión, como sigue:
- a) junto con el régimen de ayudas, si el presupuesto de ayuda estatal del régimen supera los 150 millones EUR en un año determinado o 750 millones EUR a lo largo de toda su duración;
 - b) en un plazo de 30 días hábiles a partir de cualquier cambio importante que aumente el presupuesto del régimen a más de 150 millones EUR en un año determinado o de EUR 750 millones EUR a lo largo de toda su duración;
 - c) en un plazo de 30 días hábiles a partir del registro en la contabilidad oficial de gastos superiores a 150 millones EUR en cualquier año.
- 215) El proyecto de plan de evaluación debe ajustarse a los principios metodológicos comunes establecidos por la Comisión¹²⁸. Los Estados miembros deben publicar el plan de evaluación aprobado por la Comisión.
- 216) La evaluación *ex post* debe efectuarla un experto independiente de la autoridad que conceda la ayuda sobre la base del plan de evaluación. Cada evaluación debe incluir al menos un informe de evaluación intermedio y otro final. Los Estados miembros deben publicar ambos informes.
- 217) El informe final de evaluación debe presentarse a la Comisión con la debida antelación para que esta estudie la posible prórroga del régimen de ayudas y, a más tardar, nueve meses antes de su expiración. Este plazo se podrá acortar en el caso de los regímenes que activen el requisito de evaluación en sus dos últimos años de aplicación. El ámbito y las modalidades exactos de cada evaluación se indicarán en la decisión de aprobación del régimen de ayudas. La notificación de toda medida de ayuda posterior con un objetivo similar debe describir de qué manera se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación.

9 DISPOSICIONES FINALES

- 218) Las presentes Directrices se aplicarán a partir del día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- 219) La Comisión aplicará las presentes Directrices a todas las medidas de ayuda notificadas tras la publicación de las Directrices en el Diario Oficial, aun cuando los proyectos se hubieran notificado con anterioridad a esa fecha.
- 220) De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales¹²⁹, la Comisión aplicará a la ayuda ilegal las normas en vigor en el momento en que se concedió la

¹²⁸ Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, «Common methodology for State aid evaluation» (Metodología común para la evaluación de las ayudas estatales), Bruselas, 28.5.2014, SWD(2014) 179 final, o cualquiera de sus sucesores.

¹²⁹ DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

ayuda. Por consiguiente, aplicará las presentes Directrices en el caso de ayudas ilegales concedidas después de su fecha de publicación.

221) La Comisión propone a los Estados miembros, sobre la base del artículo 108, apartado 1, del Tratado, las siguientes medidas apropiadas:

- a) Los Estados miembros deben modificar, en caso necesario, sus regímenes de ayudas existentes para ajustarlos a lo dispuesto en el apartado 7.1. de las presentes Directrices en un plazo de doce meses a partir de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- b) Los Estados miembros deberían manifestar su acuerdo incondicional expreso con las medidas apropiadas (incluidas las modificaciones) propuestas en el punto a) en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de las Directrices en el *Diario Oficial de la Unión Europea*. De no haber respuesta, la Comisión asumirá que el Estado miembro en cuestión no está de acuerdo con las medidas propuestas.